

CAPÍTULO QUINTO

*Violencias y ciudades**

OLIVIER PISSOAT (COORD.)

OLIVIER BARBARY

Colombia es un teatro de violencias cuya acumulación ha creado una situación comparable a una guerra. A la lucha entre el Estado y las más antiguas guerrillas de América Latina, han venido a sumarse los narcotraficantes y, más recientemente, los paramilitares, quienes han alcanzado tal poder que hoy reclaman su participación oficial en las negociaciones entre el gobierno y la insurrección armada. En este contexto, marcado también por la urbanización creciente de la población, las grandes ciudades se convierten en nuevos soportes para el desarrollo de la violencia. ¿Cómo repercuten en las metrópolis los combates librados por los distintos contrapoderes insurreccionales? ¿En qué medida responde igualmente la violencia a las especificidades del medio urbano y a las condiciones socioeconómicas de sus habitantes? Resulta necesario detenerse en algunas condiciones metodológicas ineludibles antes de ofrecer elementos para responder esas dos preguntas.

La violencia es un término usado para describir situaciones muy diversas. En ausencia de una definición común y limitada, la polisemia del término genera múltiples interpretaciones, incluso contradictorias. F. GAITÁN lo subraya a propósito de las investigaciones sobre el tema en Colombia: los acontecimientos y los factores explicativos considerados son tan diferentes que terminan sin referirse todos al mismo fenómeno (GAITÁN, 1997: 86 y 87). Hay que reconocerlo, las clasificaciones de las distintas formas de violencia son numerosas, variables, con frecuencia están imbricadas y en ocasiones no responden más que a la necesidad específica de quien las aplica. En lo que nos concierne, queremos centrar nuestro trabajo sobre la violencia intencional, incluso si este propósito general no excluye la posibilidad de conjugar categorías más finas¹ para su análisis. Bajo esta óptica, retendremos como indicador principal su manifestación extrema: el homicidio voluntario, medido por los registros del

* Con la colaboración de JUAN CARLOS ROJAS ARIAS.

1 Nuestra terminología para la definición de formas graduales de violencia intencional es la siguiente. Violencia homicida: homicidios voluntarios fuera del suicidio. Gran bandiderismo: acciones delictivas de grupos de mafiosos, en niveles económicos altos. Delincuencia común: delitos que no son homicidios en niveles económicos menores, cometidos por individuos aislados o agrupados en bandas. Delincuencia menor: delitos en niveles económicos débiles, en general sin atentar contra la integridad física.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (1982-1998). Más allá de su validez estadística (tratada en el anexo 2), esta elección es resultado de la constatación –unánime en Colombia– que la solución de los conflictos mediante la eliminación del “oponente” es una de las características de la violencia nacional. El homicidio, primera causa de mortalidad de los hombres adultos en el país, se convierte en problema nacional. En este punto, seguimos la aproximación del conjunto de los investigadores colombianos sobre el tema. No obstante, si la pertinencia de este indicador no representa duda alguna para la comunidad científica, parece que los niveles objetivos de violencia, tal como se expresan en el número de homicidios, pueden no coincidir con la percepción de la población. La frecuencia de algunas formas menos graves de violencia, desde la delincuencia común hasta la incivildad, provoca un sentimiento de inseguridad entre la población que debe ser analizado. Por esta razón, completaremos los hallazgos derivados de la violencia letal mediante los resultados sobre los delitos de robo, que reflejan mejor esta otra dimensión del problema. Al seguir esta perspectiva, queremos evitar la mezcolanza que consiste en atribuir el conjunto de las manifestaciones de violencia a las modalidades y dinámicas específicas del conflicto armado, que tanto se impone en Colombia. Incluso si resulta comprensible, esta confusión desemboca, en el peor de los casos, en el sensacionalismo, y en el mejor, en análisis que subrayan, exclusivamente y en todo lugar, la confrontación entre el Estado, las guerrillas, los narcotraficantes y los paramilitares. La distinción entre el homicidio y el *continuum* de las formas más reducidas de violencia nos conducirá a un diagnóstico más matizado.

En Colombia, como en otros lugares, la agenda política influye exageradamente en el debate público sobre la violencia y la inseguridad: el aumento real o supuesto de la criminalidad se ha convertido en el argumento fundamental para el tratamiento de los problemas sociales y la seguridad pública². Por eso, más que en otros dominios de las ciencias sociales, la explotación de los datos requiere una vigilancia redoblada. Respecto a la delincuencia, el investigador

2 L. WACQUANT denunció de tiempo atrás, en los países desarrollados, esta lógica oculta que constituye no sólo un objetivo electoral sino que reenvía a la doctrina de la retirada del Estado social y el reforzamiento del Estado punitivo.

dispone de diversas fuentes, cada una en el origen de diferentes sesgos, tanto por causa de las dificultades metodológicas propias de la observación de esta compleja realidad, como en razón de los marcos conceptuales con frecuencia más determinados por el uso ideológico de los datos que por criterios del análisis científico. Cuando los estudios se apoyan en registros de administraciones responsables de la seguridad, no es la violencia real lo que captan. Al evaluar el fenómeno “aparente” (es decir, conocido e inventariado por los servicios policiales o judiciales), esas estadísticas sólo muestran el trabajo cumplido por los organismos del Estado y su evolución. A este obstáculo metodológico se unen otras incoherencias ligadas a los indicadores utilizados para la violencia no homicida. Por tanto, preferimos no usar los datos relativos a la delincuencia constatada más que a título de orden de magnitud. Siguiendo recientes trabajos de criminología, privilegiaremos en nuestro análisis los resultados obtenidos en una encuesta realizada a las familias: la emprendida en Cali en 1998, en el seno del programa de investigación CIDSE-IRD (anexo 2).

Por otro lado, parece que el problema de la inseguridad —experimentada o presentida— es común en el conjunto de metrópolis del planeta. La vida cotidiana de los ciudadanos estaría cada vez más afectada por la incivilidad, los desórdenes, las exacciones, en una palabra, las “violencias” que, por añadidura, serían específicas del medio urbano. A pesar de la recurrencia en el uso de la noción de “violencia urbana” —en los medios de comunicación y en numerosas obras especializadas donde se tratan otros aspectos de la ciudad—, su rigurosa definición todavía es una tarea pendiente. Según L. WACQUANT, su uso no siempre reposa sobre un fundamento científico: “puro artificio burocrático desprovisto de coherencia estadística y de consistencia sociológica”; se trata de una noción “sobre la cual cada uno puede establecer lo que le convenga dado que no corresponde casi a nada” (WACQUANT, 1999: 49 a 57). En una concepción “a la francesa”, la “violencia urbana” es de hecho un término genérico que designa a los problemas causados por grupos de jóvenes surgidos de las afueras desfavorecidas (MACÉ, 1999: 59 a 64)³. Circunscrita

3 L. BUI-TRONG, comisario principal de la Dirección Central de Información General, limita más esta definición, y entre los actos delictivos imputados a este sector de la población, insiste en los perpetrados contra las instituciones (BUI-TRONG, 1998: 215 a 224).

de esa manera, la “violencia urbana” no incluye pues los crímenes o delitos debidos al gran bandolerismo, aunque sean cometidos frecuentemente en la ciudad, y corresponde a formas de delincuencia localizadas *a priori*, espacial y socialmente. En Estados Unidos los niveles de violencia superan a los vividos en Europa⁴. A pesar de esto, los debates estadounidenses tienden a imponer una problemática común al conjunto de los países desarrollados, en la cual Estados Unidos puede representar una situación extrema para evitar, pero al mismo tiempo el modelo a imitar en materia de represión, adaptándolo a otros contextos. Testimonio de esto es la generalización de las políticas llamadas de “cero tolerancia”. ¿Existe, en el contexto colombiano, alguna pertinencia de la acepción que tiene la noción de violencia urbana en los países desarrollados? Se puede poner esto en duda, pues a pesar de la similitud del término, los especialistas colombianos no han ofrecido una definición precisa de lo que también llaman “violencia urbana”⁵. Es cierto que la violencia en la ciudad ha sido estudiada a nivel nacional desde hace apenas quince años, a diferencia del conflicto armado, predominantemente “escudriñado” y convertido con el tiempo en un campo tradicional de la investigación (PISSOAT y GOUËSET, 2002). Al igual que en Europa, la violencia en las ciudades es presentada por los investigadores como un fenómeno multidimensional con límites imprecisos pero con una atención suplementaria dirigida hacia los perjuicios experimentados por las personas en la vida cotidiana. La “violencia urbana” es entonces una categoría práctica muy general cuya única condición es topológica: su especificidad se reduce a agrupar las exacciones perpetradas en las ciudades, sin que algún tipo específico de violencia sea particularmente designado o dejado de lado. Las características principales del problema, dada su heterogeneidad, son todas sus modalidades, que son consideradas tanto en las ciudades como en el resto del país. Y privilegiar los hechos del derecho común corresponde a la percepción compartida por toda la población⁶.

4 Cfr. los balances sucesivos establecidos por S. BODY-GENDROT (1993, 1998, 2001).

5 Los investigadores más reconocidos, A. CAMACHO y A. GUZMÁN, se preguntan al respecto en los preámbulos de casi todas sus publicaciones.

6 “En el lenguaje cotidiano, la violencia urbana es vista como difusa, de la delincuencia, o como violencia común” (CAMACHO y GUZMÁN, 1997: 26). En ausencia de una definición

Nuestro trayecto estará guiado por la articulación y la discusión de dos paradigmas. El primero, reductor e incluso oculto, el de la “violencia urbana” en su definición típica de los países desarrollados, que señala como objeto problemático y social a la delincuencia juvenil en las zonas “sensibles”. El segundo, propio de Colombia, se apoya sobre la constatación de una “guerra contra la sociedad”, la cual se encuentra “como rehén” en manos de los protagonistas del conflicto armado (PÉCAUT, 1999a). Insistiendo en las interacciones que vinculan a todas las modalidades de violencia homicida (homicidio y no homicidio, en la ciudad y en el campo), esta interpretación puede conducir a una aproximación unívoca a los fenómenos, puesto que algunos son –más de lo que se supone– tal vez independientes de los otros. Por una parte, nos parece pertinente separar analíticamente a la delincuencia de la violencia “política”, pues esta separación permite evaluar de nuevo el particularismo colombiano que con frecuencia conduce –con un gran refuerzo de fórmulas de choque– a fortalecer la imagen caricaturesca del país. Por otro lado, compartimos las críticas a la noción de “violencia urbana”, pues ellas denuncian el tratamiento represivo y con un blanco social determinado, de una supuesta patología de los jóvenes.

Para abordar esta problemática rápidamente bosquejada, comenzaremos por establecer un diagnóstico que describe el “comportamiento” de las ciudades en el contexto de la violencia nacional, esta última situada de nuevo bajo una rápida comparación internacional. En una segunda parte, centrada sobre la violencia homicida, intentaremos evaluar las particularidades comunes a las metrópolis, tomadas globalmente y luego en sus especificidades, caso por caso. La tercera parte tratará sobre la delincuencia menor e identificará sus determinantes en Cali. En concreto, el estudio propondrá un diagnóstico espacial de la violencia homicida en las ciudades desde 1982 y un balance estadístico sobre la delincuencia en Cali en 1998. Con estos resultados empíricos intentaremos, por una parte, identificar el impacto de los enfrentamientos “políticos” sobre la ciudad, donde mostraremos que la violencia homicida en

precisa de la “violencia urbana”, y de acuerdo con CAMACHO y GUZMÁN cuando concluyen que “no parece muy productivo embarcarse en debates que tienen más de semántica que de capacidad teórica” (ibíd.: 27), preferimos emplear la expresión “violencia(s) en la ciudad”.

Cali y Bogotá está marcada sobre todo por las dinámicas de penetración del gran bandolerismo en la ciudad; por otra parte, veremos que el análisis de los factores de exposición a la pequeña delincuencia en Cali vuelve a poner en el orden del día las interpretaciones sociológicas ligadas a la ruptura del lazo social y la exclusión económica.

I. LA AMPLITUD DE LAS VIOLENCIAS EN COLOMBIA

De 1992 a 1997 el número de homicidios se redujo un 25% en Colombia. En esta fecha, Colombia permanecía bajo el yugo de una violencia extrema, aunque no era el único país del mundo en esa situación. La dificultad para captar la violencia proviene de su característica mayor, que es la heterogeneidad, generada esencialmente por las interferencias debidas al tráfico de drogas y al conflicto armado. La víctima principal es la población civil. Lo mostraremos en las ciudades, cada vez más afectadas no sólo directamente por los enfrentamientos armados sino por la extensión al medio urbano de las prácticas del gran bandolerismo, y en el campo, donde no existe otra alternativa que la aceptación de la soberanía de las facciones en lucha o la huida. Las ciudades más grandes se convierten así en el destino para un nuevo tipo de éxodo rural por parte de los *desplazados*, para quienes las escasas ayudas de inserción no logran librarlos de sus estigmas. Si es la sociedad entera la que ahora se siente amenazada, es importante sin embargo interrogarse sobre el papel efectivo del conflicto armado en la generalización del sentimiento de inseguridad.

A. LAS TASAS COLOMBIANAS DE HOMICIDIO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Los datos del *Demographic Yearbook* indican que de 1955 a 1969, las tasas de homicidio en Colombia formaron parte constantemente de las cinco más elevadas del mundo (LOSADA y VÉLEZ, 1988: 38 a 41), con un promedio de 31 hpcmh (homicidios por cien mil habitantes)⁷. Durante los años 1970, la

7 Una país sería “violento” cuando su tasa supera los 10 hpcmh (DEAS y GAITÁN, 1995:

cifra descendiendo para situar al país entre el quinto y el décimo lugar en el rango mundial, con un promedio de 20 hpcmh durante los diez años, es decir, cuatro veces más que el de los países europeos, pero dos veces menos que el de la dictadura chilena de fines de la década (45 hpcmh). En cambio, durante los años 1980, Colombia es clasificada en el trío que va a la cabeza, con una tasa creciente sin cesar. Situada después de El Salvador y Guatemala entonces en guerra, hasta 1984, Colombia alcanza el primer lugar hacia fines de la década⁸. América Latina es un continente particularmente violento, e incluso en ese contexto Colombia alcanza la “cumbre”, superando por tres veces el promedio subcontinental. A fines de los años 1980 Colombia presenta una tasa dos o tres veces más alta que la de Venezuela, cuyo nivel de desarrollo es similar a la de grandes países como Brasil o México, e incluso cinco veces más elevada que la de Estados con estructuras sociales semejantes, pero más pobres, como Perú o Ecuador.

Un paralelo idéntico en 1994 (Naciones Unidas, 1994) permite apreciar evoluciones recientes. Si la violencia homicida aumenta en la inmensa mayoría del país, la jerarquía del período precedente es globalmente respetada: Asia, donde en verdad pocos países han sido objeto de inventarios, permanece como la región más protegida, seguida por Europa, Estados Unidos y por último Latinoamérica, dos veces más violenta que el resto del mundo. Sin embargo, aparecen dos zonas suplementarias anteriormente mal o no inventariadas. Se trata en primer lugar del continente africano, que se encuentra en el segundo lugar. La situación africana legitimaría una aproximación con América Latina, como se hizo en 1998 en un estudio del Interregional Crime and Justice Research Institute⁹. La segunda zona, en adelante presente en las estadísticas internacionales, abarca a los países surgidos del desmembramiento de la

212) y estaría en situación de “guerra” cuando tiene una tasa superior a 50 hpcmh (RUBIO, 2000: 158).

8 Las encuestas internacionales de victimización o las cifras de la INTERPOL confirman la jerarquía propuesta aquí, fruto de la combinación y verificación de las cifras ofrecidas por diferentes trabajos de las Naciones Unidas que desembocan en los inventarios de cincuenta países a mediados de los años 1980 y de más de cien a mediados de los años 1990.

9 Fuente: [www.unicri.it]

Unión Soviética, donde la violencia, invisible hasta entonces en este tipo de inventarios, parece muy reciente. Es al menos el caso para Rusia, cuya tasa se ha más que duplicado en relación a la de los años 1980 (CHESNAY, 1999: 128). Clasificada después de las Bahamas, Colombia conserva en 1994 –según las Naciones Unidas¹⁰– un puesto preponderante con una tasa de 76 hpcmh. Para ilustrar este punto retomaremos el comentario evocador de J. A. BEJARANO (1997: 15), quien utiliza otras fuentes pero cuyos resultados son corroborados aquí: la tasa departamental más baja de Colombia, obtenida por el Chocó, supera la de otras naciones de América del Sur, y permanece en un nivel diez veces superior al de los países más pobres del mundo, como Sudán.

Este breve panorama internacional muestra que la repartición y la evolución de los homicidios en el mundo siguen tendencias geográficas fuertes y duraderas. También permite observar “nuevas” regiones cuya situación parece agravarse o convulsionarse, como las de algunos países de la antigua Unión Soviética, y especialmente de África, que en su zona meridional se parece a Colombia y supera los niveles registrados en varios países latinoamericanos. Colombia se distingue por una tasa de homicidios que permanece como una de las más elevadas del planeta desde hace casi cincuenta años. No obstante, esta característica excepcional debe ser relativizada mediante dos consideraciones: en primer lugar, la disminución de la distancia que la separa de los “siguientes”; en segundo lugar, y sobre todo, la carencia de datos o de fuentes cronológicas fiables sobre algunos países de Asia y África, que impide una comparación rigurosa en el largo plazo.

B. VIOLENCIAS HETEROGÉNEAS: CONFLICTO ARMADO Y TRÁFICO DE DROGAS

El último medio siglo constituye en Colombia un momento singular de renovación de la violencia, concentrado en dos períodos particularmente asesinos. Uno de ellos, objeto de nuestro estudio, dura desde 1980; el otro, llamado *La Violencia*, se desarrolla alrededor de los años 1950, cuando se enfrentaron

10 En cambio, las estadísticas del DANE indican un descenso sensible en las tasas de homicidio a partir de 1992 (tabla 5.1).

liberales y conservadores, los dos partidos políticos tradicionales. Entre estos dos momentos, la violencia se atenuó y permaneció relegada a las zonas periféricas donde se implantaron las guerrillas, en su mayoría constituidas a partir de los núcleos de resistencia campesina creados durante los años 1950. De *La Violencia* al fenómeno contemporáneo de “nueva violencia” que viven los colombianos, las continuidades son patentes. El segundo período comienza con la decisión de las organizaciones guerrilleras de redoblar y desplegar de nuevo sus frentes, y se amplifica con el surgimiento de quienes quieren imponerse como sus más temibles adversarios: los paramilitares. Frente a esta recurrencia, en la cual muchos colombianos ven la reproducción ineluctable de un destino que compone la trama de la historia nacional, proliferan, entre algunos observadores, interpretaciones culturalistas o esencialistas de lo que sería “el caso colombiano”.

Pero las discontinuidades son igualmente profundas: contradicen esas tesis y ayudan a comprender mucho mejor la situación actual. El giro que se produjo en los enfrentamientos no puede comprenderse más que al integrar un elemento nuevo y capital: el auge del comercio de estupefacientes. Esta ruptura no se produjo en forma repentina, y el peligro que implicaba esa nueva economía sólo fue percibido tardíamente por las autoridades y la población. De hecho, durante los años 1970 la sociedad colombiana se mostró bastante tolerante hacia las mafias de la droga, hasta el punto de considerarlas como una “clase emergente” (CAMACHO, 1993: 49 a 53) y los principales “padrinos” alcanzaron el rango de las más grandes fortunas del país, con todo el poder que tal estatuto puede conferir. Cuando, a principios de los años 1980, se elevaron voces contra el ascenso del poderío del cartel de Medellín, los narcotraficantes irrumpieron entonces en las primeras instancias del escenario nacional al eliminar a cualquiera que osara pronunciarse contra sus maniobras. Esta táctica de asesinato selectivo explica el desarrollo del reclutamiento de asesinos a sueldo entre los jóvenes delincuentes de las periferias urbanas. A fines del decenio, a la presión ejercida por el gobierno y a la aplicación del tratado de extradición firmado con Estados Unidos, los jefes mafiosos responden con una “guerra total” contra el Estado a través de atentados indiscriminados que producen cientos de víctimas. Al mismo tiempo, el alcance político de los narcotraficantes va más allá de su enfrentamiento con el Estado, cuando

conforman milicias que encarnan su visión “neonazi de la miseria” (SÁNCHEZ, 2000: 277) y su odio feroz a la “subversión”. A mediados de los años 1980, financian la “guerra sucia”, emprendida simultáneamente en dos escalas, con la complicidad de militares y policías. En las ciudades, cumplen un papel mayor en la propagación de los escuadrones de la muerte, que tienen el objetivo anunciado públicamente de realizar una “limpieza social” de la ciudad, mediante la ejecución sistemática de individuos marginados o abandonados por la sociedad. En el plano nacional, fundan los más importantes comandos paramilitares con el apoyo de grandes terratenientes que quieren, como ellos, escapar al pago de los impuestos revolucionarios y permanecer como amos de sus tierras. Las víctimas de estas milicias paramilitares fueron, en primer lugar, los militantes (o supuestos militantes) de la izquierda legal, política o sindical, metódicamente eliminados durante la segunda mitad de los años 1980. Después, a medida que los magnates de la droga compraban nuevas haciendas y posesiones (REYES, 1996), las milicias se multiplicaban y reforzaban hasta el punto de estructurarse hacia 1994 como “un verdadero ejército anti-guerrilla” (PÉCAUT, 1999a: 11), que se volvió cada vez más autónomo mediante la explotación lucrativa de los cultivos ilícitos que controlaba.

Sin embargo, los “narcos”, sus aliados y sus auxiliares no fueron los únicos grupos bélicos que se beneficiaron del “dinero sucio”. Gracias a las colusiones más o menos temporales, al origen de las cuales se encuentran formidables ganancias derivadas de la venta de estupefacientes, los frentes guerrilleros —establecidos en las principales zonas de producción de coca y de amapola— también se han beneficiado, desde hace cerca de quince años, de este recurso financiero providencial para aumentar sus efectivos, mejorar su armamento e intensificar sus acciones. Pero eso no es todo. La economía de la droga incluso contaminó el funcionamiento de la Nación colombiana. En primer lugar, extendió su empresa corruptora al conjunto de las instituciones estatales y políticas, al igual que en algunos sectores de la economía como la construcción y el comercio de mercancías y, a largo plazo, provocó una crisis de valores al conmocionar las jerarquías tradicionales y los resortes de la movilidad social. El repudio hacia las antiguas normas es particularmente intenso entre los jóvenes urbanos de los barrios pobres, listos hoy a arriesgar su vida para ingresar en la sociedad de consumo. En rebelión contra la exclusión de

la que son víctimas, estos jóvenes unidos en bandas delincuenciales son fascinados por el fulgurante enriquecimiento de los malhechores más famosos. Con esos modelos, la violencia se ha convertido –a sus ojos– en el único medio para ascender socialmente, en forma inmediata, pese a su eventual precariedad. Así, como lo muestra A. SALAZAR (1998), tanto las exacciones cometidas directamente por las mafias establecidas, como la adopción de la “subcultura del narcotráfico” por esta juventud rebelde (y la atracción por el dinero fácil) –efectos indirectos del gran bandolerismo– aumentan la delincuencia en las ciudades.

C. LA PENETRACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS GRANDES CIUDADES

Desde los años 1980, nuevos actores se sumaron a los frentes guerrilleros. Las distintas estrategias de todos esos protagonistas generaron formas de violencia heterogéneas que el informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia diferenció formalmente en 1987¹¹. A partir de esta tipología novedosa, por primera vez los expertos han podido evaluar especialmente el peso de la violencia “política”: en verdad, ella no representaría más que entre un 5 y un 15% de los homicidios cometidos en el país.

También es en esta fecha cuando aparece la “violencia urbana” en las categorías identificadas, señalada en primer lugar por su intensidad: “Mucho más que las de los montes, las violencias que pueden matarnos son las de la calle” (ibíd., 18). A continuación los autores insisten en la ambivalencia del fenómeno, que “también proviene de las conductas extremas debidas tanto a la enorme pobreza como a las formas para obtener y proteger la riqueza; de la rebelión como de la dominación; de la intolerancia como de la búsqueda de

11 La afirmación del carácter proteiforme de la violencia en Colombia marca un cambio importante en el paradigma en relación con la tradición anterior, que buscaba una causa única. Pionero en esta nueva aproximación, D. PÉCAUT anticipó muy pronto la multiplicidad de causas de la *violencia*. Después, M. V. URIBE relativiza el peso de las afiliaciones partidistas de los años 1950, para subrayar la escalada prosaica de rencores personales y la venganza de sangre (URIBE, 1990).

reconocimiento” (ibíd., 69). Esta violencia recíproca es entonces juzgada como “no negociable”, porque añade a los hechos ligados a la lucha por el poder y el control del Estado acciones inherentes a las relaciones interpersonales tanto en el dominio público como en el privado. Su solución no reclamaría tanto un acuerdo debatido entre estructuras combatientes como una transformación en la mentalidad de los ciudadanos, sean éstos delincuentes o no.

Semejante balance conduce a matizar la idea de la imposición del conflicto armado sobre la violencia en las grandes ciudades. No se trata de olvidar los “campamentos” establecidos por algunas guerrillas, hacia 1985, en los barrios pobres de las principales aglomeraciones para educar militarmente a los jóvenes reclutados, ni callar sobre el reciente reforzamiento de las milicias emanadas de organizaciones de extrema izquierda o de extrema derecha. Pero, en la mayoría de los casos, no existe un compromiso explícitamente político entre las bandas juveniles prestatarias de servicios a los paramilitares o a las guerrillas (algunas veces de manera concomitante). Su conducta –guardadas las proporciones– puede recordar a la de grupos de jóvenes que causan estragos en otros países (desarrollados o no, con insurrecciones o no), en la medida en que responde a la combinación de actitudes observadas en otras partes: la rabia contra un mundo que los mantiene en la exclusión y la voluntad de acceder a toda costa al éxito material y a los signos exteriores de riqueza (maneras de vestirse, vehículos, etc.). Igualmente, hechos como los crímenes pasionales (donde intervienen la soberbia y el machismo), las riñas asesinas (con frecuencia debidas a estados de intoxicación etílica) o, según la fórmula de S. ADORNO¹² a propósito del Brasil, los “muertos al detalle” (concebidos como la última manifestación de la incivilidad), obedecen –en esta sociedad colombiana en situación de anomia– a lógicas comportamentales, más bien indiferentes a las hostilidades que ocurren a nivel nacional.

No obstante, es necesario volver a la dinámica del conflicto armado y a las prácticas del gran bandolerismo que le están asociadas, para comprender la evolución de la percepción de las violencias en las metrópolis. Los ciudadanos, a la vez compadecidos, indignados y a pesar de todo espectadores impotentes,

12 Citado por PERALVA: seminario “Ciudades y violencias”, Universidad de Toulouse 3, 19 de marzo de 2000.

se han sentido durante mucho tiempo extranjeros a los combates librados en las zonas rurales. En cuanto a las batallas sangrientas entre mafias y a los asesinatos “políticos”, ciertamente concernían a la ciudad, pero apuntaban a objetivos bien identificados: dirigentes o militantes de todo bando. Esta percepción paradójica de una violencia a la vez próxima y distante se modifica radicalmente en la bisagra de los años 1980-1990, durante la ola de atentados perpetrada por los narcotraficantes. El hombre de la calle se sabe entonces como objetivo militar potencial y el miedo se instala en todas las capas de la población. Después de la calma que sucedió al desmantelamiento de los carteles de Medellín y después de Cali, el sentimiento de inseguridad física desciende en las ciudades y es la exposición a los delitos comunes lo que progresivamente genera una nueva aprehensión. La actual estrategia de las guerrillas y los paramilitares, fundada en la coerción, el terror y la implicación de la sociedad civil, cambia la situación de nuevo y en profundidad. Los secuestros realizados en una escala sin precedentes en Colombia (masivos abusos de autoridad en las ciudades, “pescas milagrosas” en las carreteras del país) testimonian una violencia más prosaica practicada por sus actores. Los ciudadanos se sienten hundidos en esta escalada, por lo demás ampliamente difundida en los medios de comunicación, que los toca cada vez más directamente. Es probablemente allí donde se sitúa el punto de ruptura con los años anteriores. Lo que está en causa no es el aumento global del número de víctimas de la violencia “política”. Las cifras ofrecidas por la Comisión de estudio en 1987 no se pueden actualizar para el período reciente, pero los investigadores convienen unánimemente en que: a nivel nacional (al integrar así las zonas rurales donde, al contrario de las ciudades, están muy presentes), los protagonistas del conflicto armado no son responsables más que de una reducida parte de los homicidios y solamente de la mitad de los secuestros. Es por eso que una fracción cada vez más amplia de la población urbana, perteneciente principalmente a la clase media, ahora puede ser objeto de esos actos que golpean la imaginación, restringen todas las formas de libertad y, más aun, se añaden al incremento de la delincuencia ocurrido a principios de los años 1990, y se desarrolla un sentimiento general de inseguridad que a su vez se ha convertido hoy en algo insostenible para el conjunto de la sociedad.

Las guerrillas nunca han tenido la capacidad de introducir el conflicto en las ciudades (ECHANDEA, 2002: 34). Sin embargo, pueden dejar que eso se

crea aprovechando igualmente la “vulnerabilidad de las sociedades modernas” (DAVID, 1999: 81 a 84), especialmente en las áreas urbanas. El bloqueo de las vías de acceso o del aprovisionamiento de energía o de agua es un buen ejemplo de este tipo de combate que, sin necesidad de librar batalla afecta cotidianamente la vida ciudadana e impacta fuertemente a los espíritus. En tal contexto, es seguro que los atentados homicidas cometidos en las metrópolis y en las cabeceras departamentales desde el advenimiento del presidente URIBE en agosto de 2002 llevan la exasperación de los habitantes al colmo. Sin embargo, la toma de conciencia de la amplitud del conflicto armado por parte de la población urbana también supone la llegada continua a las ciudades de “desplazados”, esos migrantes internos desalojados por los combates.

D. LOS DESPLAZADOS, ¿“NUEVO PROBLEMA URBANO”?

En realidad, los desplazamientos forzados son una de las consecuencias más graves de la violencia que causa estragos en Colombia, por el número de personas afectadas y por la brutalidad y profundidad de las rupturas que provocan. El problema no es nuevo y ha ocurrido en las diferentes etapas de la historia del país. Los cálculos sobre los desplazados son recientes¹³ a pesar de todo, y aun fragmentarios: especialmente, no alcanzan a diferenciar los flujos debidos directamente a la violencia, de aquellos cuyos móviles son primero que todo económicos. Según D. MERTEENS (2000), los mejores datos son los de la CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento)¹⁴. Es posible derivar algunas tendencias generales, a pesar de la enorme diversidad de situaciones consideradas. Entre 1985 y 1998, cerca de dos millones de personas han sido desplazadas, pero el fenómeno experimenta una aceleración considerable durante este período: alrededor de 700.000 personas durante el primer decenio (entre 1985 y 1994), y más de un millón de personas durante los cinco años siguientes (1995-1999)¹⁵. En cuanto al Gobierno colombiano, éste reconoce

13 El primer balance realizado a escala nacional fue el de la Conferencia Episcopal de Colombia, en 1994.

14 [www.codhes.org.co].

15 1995, 89.000; 1996, 181.000; 1997, 257.000; 1998, 308.000; 1999, 228.000; 2000, 317.000; 2001, 342.000; 2002 (enero-junio), 204.000 (CODHES, 2001 y 2002).

una población desplazada de sólo 381.755 personas para el período 1996-1998, es decir, alrededor de la mitad de la cifra expresada por el CODHES.

Esos desplazamientos, de los cuales son responsables –en un 90% de los casos– los actores del conflicto armado¹⁶, tienen como punto de partida las zonas sometidas a los rigores de la guerra. Ocurren como consecuencia directa de los combates, para escapar de la llegada anunciada de los beligerantes¹⁷, o por expulsiones con el fin de apropiarse de las tierras. Además, aunque no todos provienen siempre del mundo agrícola y en ocasiones algunos sean ciudadanos, los desplazados esencialmente son de origen rural. Por otra parte, si bien se han registrado algunos desplazamientos colectivos, generalmente imputables a las acciones de los paramilitares, la inmensa mayoría de los desplazados huyen individualmente o en familia¹⁸. En primer lugar, ellos tratan de instalarse cerca de su antigua residencia y de las redes locales que han tejido. Sin embargo, la persistencia de las persecuciones y la precariedad económica con frecuencia los conducen –a corto o mediano plazo– hacia las cabeceras municipales, departamentales y, finalmente, hacia las metrópolis. A medida que aumentan los flujos evoluciona el espectro de los lugares involucrados: hasta 1995, los municipios de salida permanecían iguales mientras el abanico de lugares de llegada se extendía. Desde 1996, al contrario, se opera una diversificación de las zonas de expulsión y una concentración de los flujos hacia los centros intermedios y las metrópolis.

Las ciudades más grandes son escogidas preferencialmente pues ofrecen la posibilidad de perderse en el anonimato, presentan más oportunidades económicas y un acceso al estatus de víctimas jurídicas y de asistidos sociales que confiere la ayuda pública. Pero si las ciudades son un escape para los enfrentamientos armados, también guardan otras manifestaciones de violencia y de

16 Paramilitares: 47%; guerrillas: 35%; Fuerzas Armadas: 8%. El 10% restante es atribuible a desconocidos, narcotraficantes, milicias, etc.

17 Estos desplazamientos preventivos son hoy mayoritarios (74% de los casos censados en 1997: AGIER, 2003), ocasionados por el miedo, por el peligro de enrolamiento de los hijos o por amenazas directas.

18 Más del 30% de los hogares de los desplazados tiene a una mujer como cabeza de familia, entre las cuales el 40% son viudas (MERTEENS, 1999: 409).

exclusión que afectan sobre todo a la población más vulnerable. Esas condiciones se intensifican para los desplazados que son forzados a reconstruir un proyecto de vida en un contexto desconocido y distante. De hecho, su difícil inserción no sólo proviene de los obstáculos para alojarse (las redes de contactos juegan aquí un papel esencial), o por encontrar la manera de resolver sus necesidades en un mercado de trabajo donde la competencia ha sido acrecentada por la crisis económica (la economía informal, el sector de la construcción y el “rebusque” son sus únicas fuentes de ingreso¹⁹). Igualmente, los desplazados están confrontados a una estigmatización que opera en dos niveles: por haber abandonado su lugar de residencia y su vida anterior, se sospecha que están implicados en uno de los dos grupos principales de la confrontación; por encontrarse en la miseria total, se les atribuye un comportamiento potencialmente violento. Sin embargo, los estudios contradicen esta segunda suposición: no son los inmigrantes recientes quienes generan violencia en las ciudades. Ésta sólo se manifestó con fuerza a partir de finales de los años 1980, mientras el crecimiento urbano causado por el flujo de migrantes se consumó en el decenio anterior (caps. primero y segundo). Los desplazados, que “no son otra cosa que individuos comunes confrontados a situaciones anormales, encerrados en una lógica de lucha permanente y no deseada, de supervivencia y de resistencia” (OSORIO, 2002: I y II), son entonces, por distintos conceptos, las víctimas “por excelencia”: primero, por la violencia de los actores armados y, luego, por la mirada que los estigmatiza como un “nuevo problema urbano”.

E. ¿UNA VIOLENCIA GENERALIZADA?

En esta primera parte hemos planteado la necesidad de hacer una distinción de las diferentes formas de violencia según sus manifestaciones (homicidio, gran bandolerismo, delincuencia menor...), sus contextos (rural, urbano) y sus motivaciones (conflicto armado, tráfico de drogas, intolerancia, etc.). Pero estas clasificaciones útiles para el análisis se muestran insuficientes, tanto más

19 Por lo general, las mujeres encuentran trabajo rápido (empleadas domésticas, vendedoras ambulantes, etc.). Los hombres, cuyas competencias raramente están adaptadas al mercado urbano, son más dependientes de los dispositivos de ayuda del Estado o de las ONG.

cuando interfieren los fenómenos entre ellas y se refuerzan mutuamente. Las múltiples y cambiantes conexiones que se establecen entre los actores impiden descomponer con precisión los hechos, según si se inscriben en el campo político, económico o social²⁰. ¿Dónde se detiene “la violencia política” y dónde comienza la delincuencia “económica” o la “violencia social”, en un país que no ha resuelto las injusticias que legitimaron el nacimiento de la “rebelión” hace más de 30 años? ¿En qué medida intervienen la intolerancia exacerbada o la venganza personal en el paso al acto violento? ¿De qué modo pesan los tormentos económicos experimentados por los más desfavorecidos, cuando se sabe que las armas son un “oficio” que se les ofrece bajo forma asalariada, cuya afiliación no es nada definitivo y no está dictada más que por las circunstancias? Estas preguntas pueden conducir a la constatación de una violencia “generalizada”, en el sentido planteado por D. PÉCAUT “cuando diversos fenómenos de violencia entran en resonancia y definen el contexto de la mayoría de interacciones colectivas” (PÉCAUT, 1996: 226). En esta perspectiva puede subsistir, incluso implícitamente, la idea de una preponderancia del conflicto armado sobre la dinámica de conjunto de las violencias en Colombia.

Nosotros pensamos que la población colombiana no es afectada uniformemente. El clima de agresividad difusa puede interpretarse como una reacción a una vida cotidiana bajo tensión, pero los pasos al acto responden sobre todo a motivaciones cuyo origen es un objeto a investigar en el dominio socioeconómico, en el seno de una sociedad donde reinan la iniquidad y la impunidad. Por otra parte, mientras que en el pasado la violencia estaba circunscrita sobre todo a las zonas rurales y a los frentes pioneros, desde hace quince años las ciudades han sido igualmente afectadas. De ahí también proviene la generalización expresada por la mayor parte de los especialistas, quienes coinciden en describir un país en adelante golpeado en su conjunto por la violencia política. Pero la violencia en las ciudades permanece, en su mayor parte, como un fenómeno imputable a otros actores, distintos a los del conflicto armado. Hoy en día, las guerrillas sólo han logrado establecer en las ciudades redes

20 Construida a partir de la lectura de trabajos colombianos, esta categorización es actualmente la del Banco Mundial. El primer tipo de violencia sería producido por los insurgentes de todos los bandos y partidos; en el segundo se incluyen las acciones del gran bandolerismo y la delincuencia; el último corresponde a la esfera privada (MOSER y SHRADER, 1999).

limitadas de agentes cuya misión esencial se limita a un apoyo logístico para las columnas que operan en las zonas rurales. A pesar de los recientes atentados, mortales, espectaculares y simbólicos por la elección de sus blancos, el grueso del tributo pagado por las ciudades a la violencia homicida es responsabilidad de organizaciones delincuenciales desprovistas de móviles políticos.

II. LA DINÁMICA ESPACIAL DE LOS HOMICIDIOS

La situación colombiana es tal que “los enfrentamientos y las interferencias que la caracterizan pueden suscitar un contexto que sustituye al contexto inicial” (PÉCAUT, 1996: 245). Así se establece un proceso de auto-mantenimiento de las rivalidades, que tiene como consecuencia una fuerte inercia espacial de la violencia. La persistencia del fenómeno en un mismo lugar también constituye un elemento tan significativo como el grado que alcanza. Es entonces el estudio simultáneo de estos dos criterios (intensidad y duración) lo que mejor da cuenta del impacto de la violencia en los espacios afectados. En la distribución y evolución de los números y las tasas de homicidio observadas hasta 1998, aparecen los dos principales factores estructurantes de la geografía de la violencia en Colombia: la densidad de la población y la de los recursos económicos en las zonas rurales. Las metrópolis (Bogotá, Medellín y Cali) tienen, en la evolución de las estadísticas nacionales, un papel preponderante pero diferenciado que merece un examen particular. A escala intraurbana, la comparación entre Bogotá y Cali muestra algunas regularidades en la temporalidad, las características de las víctimas y la repartición espacial de los homicidios. Por último, al hacer una comparación internacional con otras capitales, Bogotá no merece su imagen de ciudad afectada por una violencia paroxística.

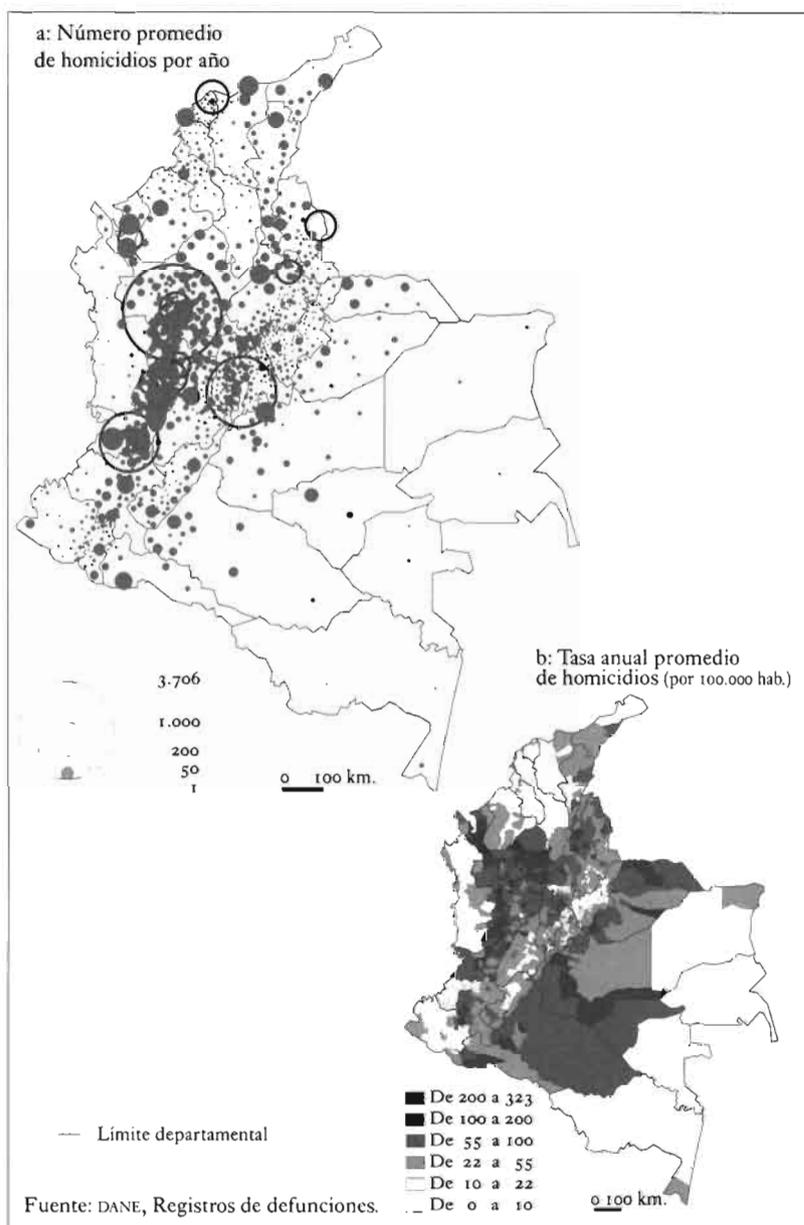
A. LA IMPLANTACIÓN DE LOS HOMICIDIOS: POBLACIÓN Y RECURSOS COMERCIALES

Observada bajo el ángulo del número de hechos perpetrados (mapa 5.1a), la distribución de los homicidios por municipio traduce las estructuras elementales del poblamiento del territorio y arroja luz sobre la intensidad del problema en algunas ciudades. La correlación global entre número de habitantes y nú-

mero de homicidios no obstante se contradice en las tres primeras aglomeraciones del país, con una importancia desproporcionada de los homicidios en Medellín, mientras que su número es mucho menor en Bogotá y Cali. En la sección siguiente volveremos sobre estas diferencias. Por supuesto, es necesario razonar a través de tasas para completar esta visión (mapa 5.1b). El mapa de intensidad de la violencia homicida se diferencia entonces claramente del mapa del poblamiento. Más allá de la larga banda meridiana que coincide con la Colombia andina y caribe, efectivamente muy pobladas, se destacan algunas partes del territorio muy afectadas aunque débilmente ocupadas: por ejemplo, los municipios del piedemonte oriental. En el seno de las regiones pobladas, las ciudades costeras caribes están relativamente salvaguardadas, al igual que el Altiplano de la cordillera oriental, especialmente con la reducida tasa registrada en Bogotá. La cartografía de los municipios menos y más violentos entre 1982 y 1998 (mapa 5.2) confirma que municipios de tamaños muy diferentes pueden pertenecer a una misma clase, pero su concentración geográfica demuestra una lógica espacial de repartición. La interpretación de esas diferencias entre las distribuciones espaciales de los habitantes y los homicidios nos vuelve a conducir al conflicto armado. Más que la repartición de la población, es el interés estratégico en los lugares y los recursos económicos que guardan lo que explica la localización de los grupos armados y, por tanto, de las regiones donde prima el uso de la fuerza. Como lo prueban los trabajos de C. ECHANDÍA, el control de la producción y comercialización de las riquezas, lícitas o no²¹, es en adelante un desafío esencial para los protagonistas del conflicto. Por lo demás, estos últimos se alejan cada vez más de sus bases sociales, dispensados como están —gracias a esos recursos financieros— de adquirir un apoyo popular para asentar su capacidad militar (PÉCAUT, 2002: 15).

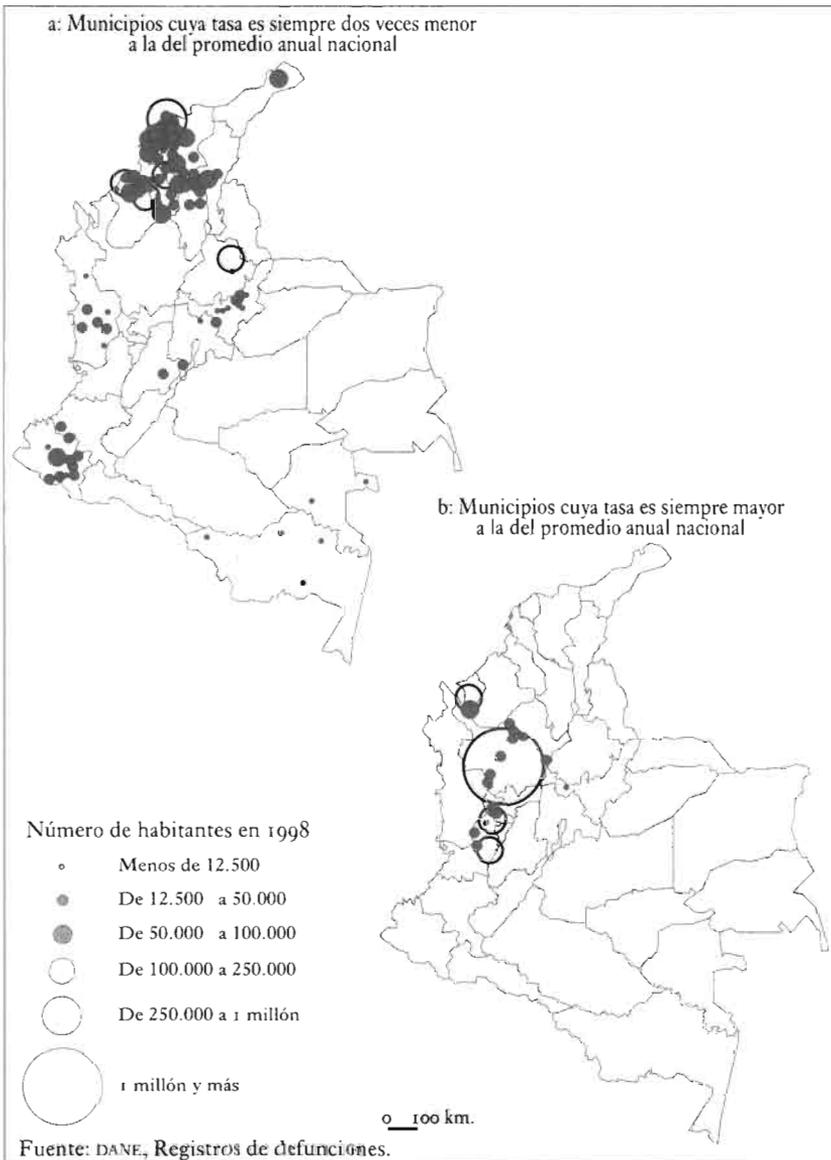
21 Se pueden citar especialmente las plantaciones de banano del Urabá, las cuencas auríferas del bajo Cauca y del sur de Bolívar, las cuencas petrolíferas al norte del piedemonte oriental, la región de esmeraldas de Boyacá, la coca sobre todo en las planicies orientales y la cuenca del Amazonas, el opio en las cordilleras central y occidental donde las tierras del eje cafetero, en crisis, son muy propicias para su explotación, que comenzó en 1990.

MAPA 5.1
 VIOLENCIA HOMICIDA POR MUNICIPIO DE 1982 A 1998



Concepción y realización: O. PISOAT

MAPA 5.2
 MUNICIPIOS POCO VIOLENTOS Y MUY VIOLENTOS
 ENTRE 1982 Y 1998, SEGÚN SU TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES



Concepción y realización: O. PISOAT

Trabajos estadísticos como los de GAITÁN (1995: 236 a 245) han mostrado la marcada ausencia de correlación entre número de habitantes y tasa de homicidio. En efecto, las lógicas que las subtienden son distintas. El número de homicidios sigue en gran medida a la concentración de la población y nos reconduce a la violencia del derecho común, principalmente urbano, del cual hemos visto a todo lo largo de la primera parte que generalmente se trata de una violencia desprovista de móviles políticos. Por estar de algún modo “disuelta” en importantes cifras de población, y por eso menos visible en las tasas, esta “violencia ordinaria” no es menos el hecho estadístico mayoritario. La lógica de la tasa está en sí muy ligada a las estrategias de los actores del conflicto armado y a la competencia que libran por acceder a los recursos comerciales: en consecuencia, ella depende más de la distribución espacial de estos últimos que de la de los habitantes. Estas dos lógicas en ocurrencia son percibidas con mucha frecuencia como antinómicas en el campo de la “violentología”²². De hecho, ellas operan simultáneamente, interactúan en algunos casos, pero se impone su identificación por separado si se quiere situar, como acabamos de hacerlo, la desigual importancia estadística de sus dos motores: el homicidio objeto del derecho común domina entonces ampliamente sobre el homicidio de origen político.

¿Cómo evolucionan, en nuestro período de observación, la estadística de los homicidios y su distribución espacial? La observación de la tasa de homicidios en Colombia de 1982 a 1998 (tabla 5.1) muestra en primer lugar un aumento general de la violencia durante el primer decenio, hasta alcanzar un máximo en 1991 y 1992, seguido por un descenso global en 1998.

TABLA 5.1
TASA DE HOMICIDIOS EN COLOMBIA (1982-1998)

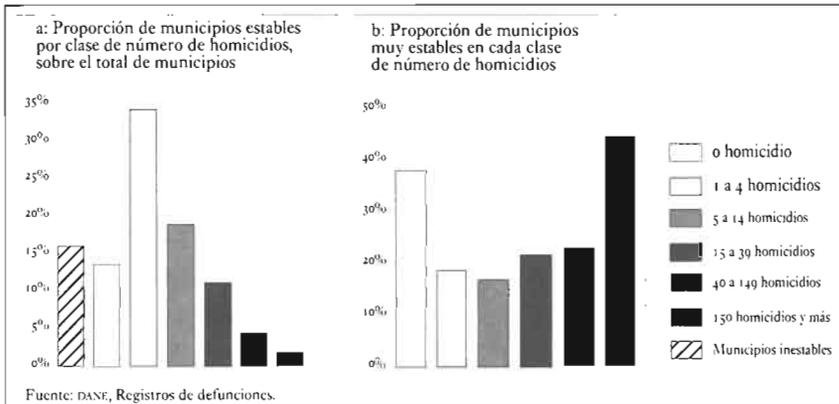
Años	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
Tasa (número de homicidios por 100.000 habitantes)	31	31	31	39	46	50	57	63	65	78	79	73	69	63	66	55	59

Fuente: DANE, Registros de defunciones.

22 Neologismo de los medios de comunicación colombianos para designar el estudio de la violencia.

En el contexto nacional, para situar las zonas que aquí llamaremos “estables” e “inestables”, hemos definido como estables a los municipios afectados de manera similar (incluyendo la clase del número de homicidios) durante la mayor parte del tiempo, en 9 años o más (gráfico 5.1a). Tal categorización arroja luz sobre dos hechos principales. Por una parte, el 84% de los municipios colombianos puede ser considerado estable. Semejante proporción indica hasta qué punto se encuentra anclada la violencia en el territorio y reposa sobre bases que perduran en el tiempo.

GRÁFICO 5.1
ESTABILIDAD DE LA REPARTICIÓN DE LOS HOMICIDIOS
(1982-1998)

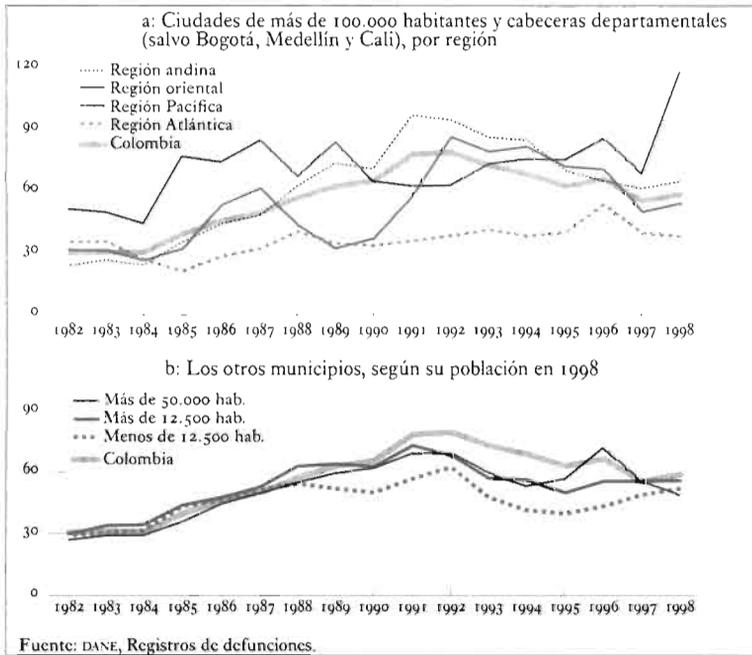


Concepción y realización: O. PISSOAT

Pero por otra parte, entre esos municipios, la situación está contrastada de una clase a otra. Las diferencias se muestran más cuando uno se sitúa del lado de los municipios que podemos calificar como “muy estables”, es decir que permanecen durante más de tres cuartas partes del tiempo (13 años o más) en una clase idéntica (gráfico 5.1b). Allí, los municipios inventariados en las clases extremas se distinguen claramente por una constancia mayor: 38% de ellos, muy calmados, donde no se registran homicidios, son muy estables; al igual que un 44% de ellos, muy violentos, donde ocurren 150 homicidios o más por año. Las zonas muy calmadas (0,9% de la población colombiana) y más aun las zonas muy violentas (30,7% de la población colombiana) lo son entonces de manera endémica.

Evidentemente, esta estabilidad de conjunto no impide la manifestación de fluctuaciones coyunturales a escala local, muy ligadas a episodios y escenarios de operaciones militares (gráfico 5.2a). Así, resulta posible oponer la región oriental con una tasa casi siempre superior a la de Colombia, a la región Atlántica, mucho más clemente, o incluso a la región andina, cuya curva permanece en una tendencia próxima a la del país, y a la región pacífica donde alternan fases de calma y de empeoramiento²³. A la inversa, al diferenciar a los otros municipios según las dimensiones de su población, todas las evoluciones son similares (gráfico 5.2b).

GRÁFICO 5.2
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES,
POR RANGO O TAMAÑO DE MUNICIPIO (1982-1998)



23 El deterioro de la situación en la Costa Pacífica durante estos últimos años ha sido ocultado en buena parte por el peso de Buenaventura, que es el puerto de Cali y que sigue por completo la evolución de su metrópoli.

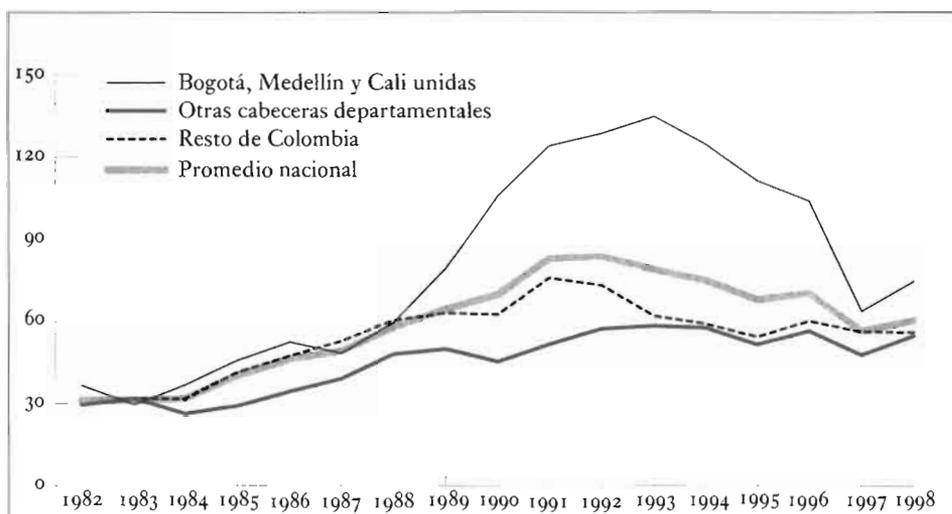
En total, sobre la parte más grande del territorio, la implantación de los diferentes niveles de violencia no varía mucho en el tiempo. La inscripción espacial del fenómeno no es aleatoria y responde a un sistema causal duradero. En efecto, la inercia es una de las características fundamentales de esos dos determinantes principales: la distribución de la población y la de los recursos económicos.

B. EL PESO DE LAS METRÓPOLIS

En la evolución de la tasa de homicidio por tipos de municipios colombianos desde 1982, se debe distinguir dos períodos (gráfico 5.3). De 1982 a 1988, las tasas de Bogotá, Medellín y Cali unidas, de las otras cabeceras departamentales y del resto del país aumentan en forma paralela: las tres metrópolis y el resto del país conservan tasas muy próximas (44 y 42 hpcmh en promedio respectivamente), mientras las otras cabeceras departamentales, menos tocadas (34 hpcmh), permanecen debajo del promedio nacional. Entre 1989 y 1996 se instauró una fuerte diferenciación. Las tres metrópolis se distancian claramente y ven —a pesar de un fuerte descenso después de 1993— a sus tasas promedio del período alcanzar la cifra de 114 hpcmh, es decir un alza de 159% en relación a las del período precedente. Para las otras dos categorías este crecimiento es mucho menor (57 y 52%), pero sobre todo, mientras que para las cabeceras departamentales el nivel de violencia se eleva ligeramente, el del resto del país —en lo sucesivo inferior al promedio nacional— disminuye globalmente de forma moderada pero regular hasta 1997. En resumen, mientras que durante los años 1980 la violencia homicida sigue las mismas orientaciones en el conjunto del país, en los años 1990 se intensifica en los principales centros urbanos y especialmente en las metrópolis; de manera que el peso de éstas en la evolución de las estadísticas nacionales se convierte entonces en determinante. El año de 1997 parece marcar al mismo tiempo el retorno a tasas nacionales comparables a las de fines de los años 1980 y el restablecimiento de un régimen de evolución común al conjunto del país²⁴.

²⁴ Esta hipótesis sigue siendo frágil, porque nuestra serie cronológica detallada por municipio se detiene en 1998. Sin embargo, los datos suplementarios de los que disponemos

GRÁFICO 5.3
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES
DE LOS MUNICIPIOS SEGÚN TRES CATEGORÍAS (1982-1998)



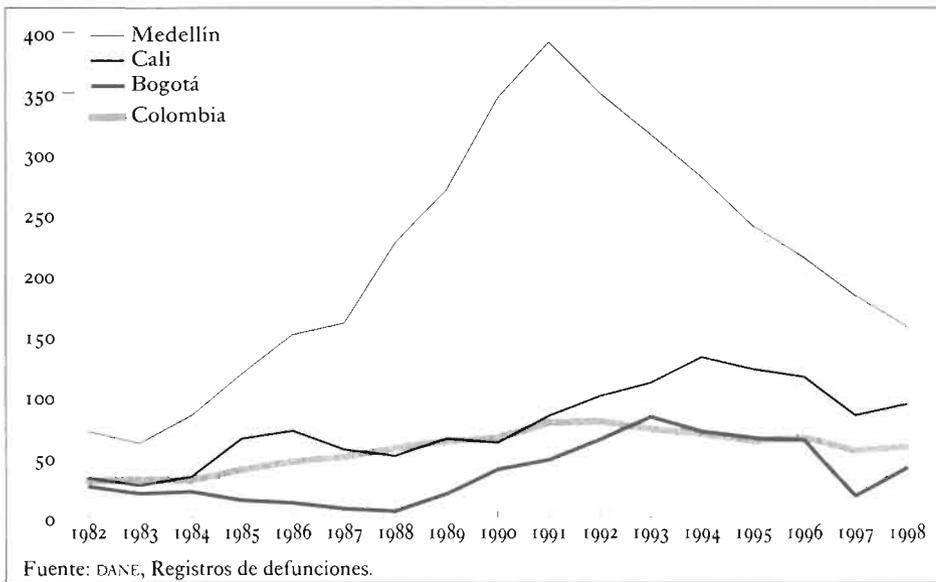
Concepción y realización: O. PISOAT

No obstante, no hay un comportamiento homogéneo en las tres metrópolis (gráfico 5.4). La singularidad de Medellín es patente. Ya en el doble del conjunto del país a comienzos de los años 1980, su tasa está en progreso constante hasta 1991, cuando muestra 392 hpcmh, el quintuple de las estadísticas nacionales. A pesar de un descenso constante desde entonces, en 1998 permanece en un nivel tres veces más alto que el promedio colombiano. Para encontrar elementos que expliquen este nivel de violencia excepcional, existen tres pistas principales. Capital del departamento de Antioquia, en el corazón de una importante zona de colonización agraria, Medellín hereda una extensa tradición de conflictos sociales que con frecuencia concluyeron con violencia. Más recientemente, la ciudad se ve en el centro de espacios que son objetivos del conflicto armado y del tráfico de drogas y, por eso, es el lugar por excelencia para la interacción de

para las tres grandes metrópolis hasta el 2001 no lo desmienten: ellos muestran una ligera tendencia al aumento (alrededor de 83 en 1999, y 84 en 2001 en promedio para las tres ciudades), completamente atribuible a las tasas de Medellín (169 en 1999, 211 en 2001).

la violencia política y del gran bandolerismo (limpieza social, milicias de todo bando, etc.). Por último, los estudios de SALAZAR (1992 y 1998) han ilustrado bien la profunda penetración social de las prácticas delincuenciales y su impacto homicida en los barrios populares de la ciudad; una dinámica que no se encuentra, en semejante intensidad, en Cali e incluso menos en Bogotá.

GRÁFICO 5.4
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES
EN MEDELLÍN, CALI Y BOGOTÁ (1982-1998)



Concepción y realización: O. PISOAT

Sin una medida común con el de Medellín, el nivel de violencia homicida en Cali es elevado. Su tasa anual, con frecuencia equivalente al promedio nacional, lo supera en dos momentos. El primero, limitado a los años 1985-1986, corresponde a circunstancias específicas de Cali: la plena actividad del cartel de la droga y de las organizaciones de limpieza social que fomentó (CAMACHO y GUZMÁN, 1990: 80 y 123). El segundo, que se inicia en 1991, corresponde en primer lugar a la dinámica económica común al conjunto del país: la crisis de empleo producto de la política de apertura económica (1991-1993). Este proceso también influye en el aumento de los homicidios en Bogotá, como lo testimonia el paralelismo casi constante de las dos curvas a partir de esa

fecha. Sin embargo, desde 1994 la diferencia entre las tasas de las dos ciudades aumenta. El Estado, luego de “terminar con Medellín” y ejecutar a PABLO ESCOBAR, se compromete con la represión de la organización de los hermanos RODRÍGUEZ OREJUELA. En Cali, el hundimiento de la economía inducido por el dinero sucio se suma entonces al impacto de la crisis económica sobre el empleo, hoy en día vigente.

Al contrario de Medellín y Cali, Bogotá permanece casi siempre menos violenta que el conjunto del país. Durante los años 1980, la ciudad incluso ve disminuir su tasa mientras ésta aumenta en las demás zonas del país. A partir de los años 1990, la violencia se agrava en Bogotá hasta el punto de alcanzar por un tiempo el nivel nacional. La diferencia entre la capital y las otras dos metrópolis tiene una explicación principal, que siempre vuelve a mencionarse en las entrevistas a los especialistas: en Bogotá, las redes de los narcotraficantes no están tan fuertemente establecidas como en Medellín y Cali. En la capital del país, el comercio de estupefacientes se desarrolla esencialmente en función del consumo local (en permanente aumento) y, si se trata de la exportación, Bogotá no sirve más que de punto de partida para las “mulas” hacia el extranjero²⁵. La influencia de las mafias de la droga, “más tardía y exógena”²⁶, no se apoya sobre los mismos dispositivos y no entraña la misma proliferación de bandas armadas organizadas para cometer asesinatos. Para explicar la violencia homicida en Bogotá, es necesario considerar factores económicos y sociales endógenos, que vamos a abordar ahora por diferentes vías.

C. BOGOTÁ Y CALI: REGULARIDADES ESTRUCTURALES QUE SUPERAN EL MARCO COLOMBIANO

La evolución análoga de Bogotá y Cali a todo lo largo de los años 1990 es otro tanto más notable, pues la violencia letal parece reaccionar a una serie

25 Entrevista con el coronel RICAURTE, noviembre de 2000: “El papel de Bogotá incluso está muy atenuado; todos los procesos verbales se cortan aquí: las mulas detenidas en el aeropuerto no son acusadas en Bogotá sino sobre todo en la región cafetera, por ejemplo en Pereira”. Esta opinión se verifica con la lectura de los testimonios reunidos por A. MOLANO (1997).

26 Entrevista con M. V. LLORENTE, noviembre de 2000.

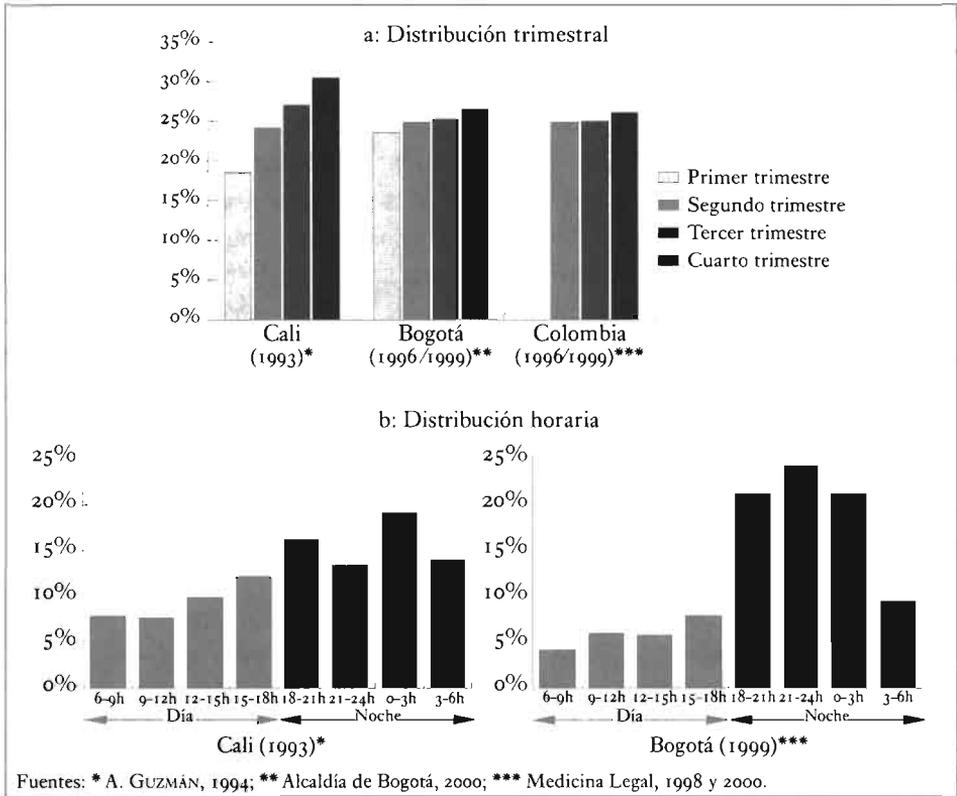
de factores comunes. La diferencia de intensidad proviene de condiciones específicas, entre las cuales juega un papel esencial la implantación del crimen organizado.

I. LOS “HITOS” DE LA VIOLENCIA HOMICIDA

Como lo muestra el gráfico 5.5a, el número de homicidios aumenta progresivamente en el curso del año, para culminar en el último trimestre. Esta tendencia, más marcada en las metrópolis, se reconoce en el conjunto de Colombia²⁷. Las fiestas de fin de año son la ocasión para numerosas compras, con frecuencia onerosas. Entonces, algunos se ven tentados a recurrir a la violencia para procurarse los medios de participar en los regocijos comunes. Otras semejanzas en los calendarios del homicidio en Bogotá y Cali remiten a explicaciones económicas. Por lo general, los empleados colombianos reciben sus salarios por quincenas, luego cada quince días se registra un aumento del número de homicidios, determinado por GUZMÁN para Cali (GUZMÁN, 1994: 20) y por SEGOVIA para Bogotá (SEGOVIA, 1994: 22). Igualmente, el análisis de datos diarios revela una frecuencia superior de los homicidios durante los fines de semana, los días viernes, sábado y domingo concentrados en mitades de mes. Confirmados por el estudio de SEGOVIA, quien también señala en forma idéntica los días feriados y los “puentes” (ibíd.: 20 a 22), estos resultados demuestran los efectos de lo que GUZMÁN llama la “rumba pesada” (GUZMÁN, 1994, 28), es decir, los comportamientos violentos asociados con la fiesta y el consumo de alcohol y drogas. Finalmente, la distribución horaria de los homicidios demuestra en las dos ciudades una recrudescencia durante la noche (gráfico 5.5b). Sin duda, ninguno de estos resultados es exclusivo del contexto colombiano.

27 Sin embargo, hay que hacer notar que fuera de las ciudades las estacionalidades son otras. Así, en la zona cafetera se produce un aumento de los homicidios en el momento de las cosechas, con la migración estacional de mano de obra mayoritariamente masculina. A nivel nacional, la distribución también puede mostrar algunos picos circunstanciales, especialmente durante la aproximación de elecciones que entrañan una recuperación de la actividad de actores del conflicto armado con el fin de influir en la votación e impedir su acceso en las zonas que controlan.

GRÁFICO 5.5
DISTRIBUCIONES TEMPORALES DE LOS HOMICIDIOS
EN CALI (1993) Y BOGOTÁ (1999)



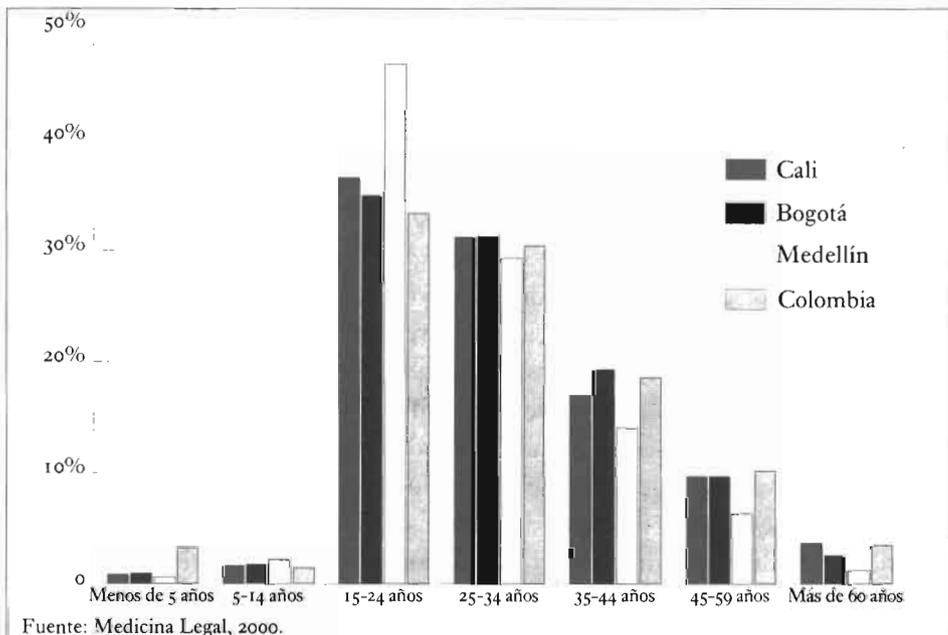
Concepción y realización: O. PISSOAT

2. LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS VÍCTIMAS DE HOMICIDIO

Los grupos de edad más tocados por la violencia son los jóvenes (15-24 años) y los jóvenes adultos (25-34 años), tanto en las metrópolis como en el conjunto del país (gráfico 5.6). Allí tampoco hay nada exclusivo de Colombia: los trabajos del BID, por ejemplo, se basan en esos grupos de edad y sus proyecciones demográficas para prevenir la evolución de la violencia en América Latina (BID, 2000: 71 a 78). Del mismo modo, como en otras partes del mundo, los hombres son de lejos los más afectados (alrededor del 93% de las víctimas,

tanto en Cali como en Bogotá, o en el resto del país). Ahora bien, según CHENY (1999:128), la amplitud del desequilibrio entre los sexos es un índice de la gravedad de la situación: “En las sociedades avanzadas, donde el crimen sólo ocupa un lugar marginal, con frecuencia limitado en lo esencial a la esfera familiar, el número de víctimas masculinas generalmente no supera mucho el número de víctimas femeninas, y la relación entre pérdidas masculinas y femeninas es sistemáticamente inferior a dos. En cambio, allí donde el Estado es deficiente y el crimen organizado campea, las víctimas están en una relación de 4/5, o más, a favor de los hombres en razón de los enfrentamientos entre bandas rivales. Ese es el caso hoy en Rusia”. Así, la sobremortalidad masculina por homicidio es común, pero en el nivel que alcanza en Colombia no lo es. En el grupo de los 25-45 años, esa sobremortalidad se traduce en “una diferencia cada vez más clara en la esperanza de vida al nacer de los dos sexos, de casi ocho años en la década de 1990” (DUREAU y FLÓREZ, 1996: 142 y 143).

GRÁFICO 5.6
GRUPOS DE EDAD DE LAS VÍCTIMAS DE HOMICIDIO
EN CALI Y BOGOTÁ (1996)



3. LOS MÓVILES DE LOS HOMICIDIOS

Sin duda alguna, la determinación del móvil de un homicidio debe ponerse en duda, y las categorías empleadas son vagas. Bajo lo que se llama “ajuste de cuentas” se pueden agrupar diferentes tipos de homicidios, puesto que generalmente no se conoce a los responsables (¿actor político o delincuente?). En estos casos, es el conocimiento disponible sobre el tema y el terreno lo que hace decir a los expertos que se trata de criminales más que de guerrilleros o de paramilitares. Con todo, las cifras son instructivas.

TABLA 5.2
PRESUNTOS MÓVILES DE HOMICIDIOS EN CALI (1993) Y BOGOTÁ (1998)

	Cali (1993) %	Bogotá (1998) %
Ajuste de cuentas	51	37
Atraco/Robo	19	26
Crimen pasional, disputa, riña	15	21
“Intolerancia social”	7	5
Otros	8	11

Fuentes: * GUZMÁN et ál., 1994; ** Instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 1999.

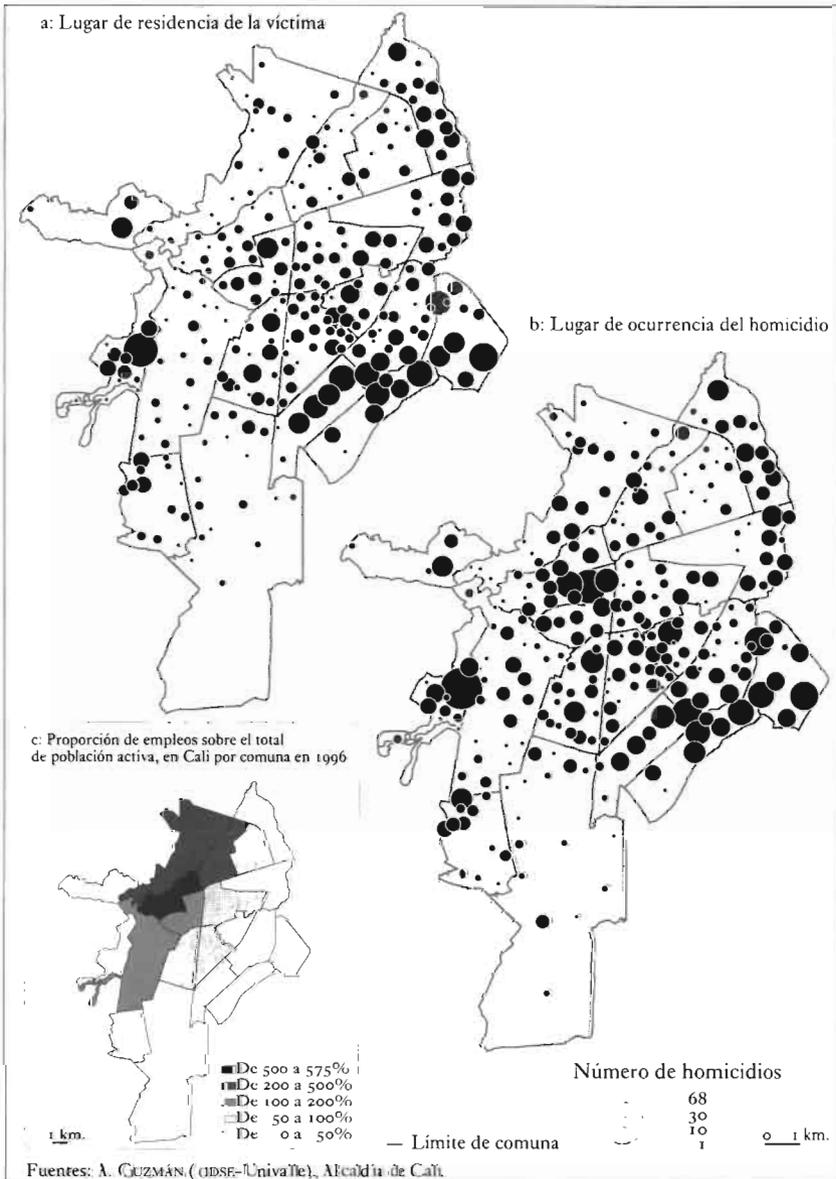
En más del 40% de los casos, ningún móvil puede ser definido y, en cuanto a la información que existe, no resulta preponderante la violencia extrema en las relaciones privadas y sociales (crimen pasional, disputa, riña). Decididamente, la hipótesis sobre una “cultura de la violencia” sostenida por algunos observadores no es válida. Pero sobre todo, resulta manifiesto que la situación vivida en Cali y Bogotá no tiene relación directa con el conflicto nacional: las rivalidades entre delincuentes (ajustes de cuentas) y los crímenes por razones económicas (atracos) totalizan respectivamente el 70% y el 63% de los móviles identificados. Por lo demás, sí existe concordancia entre el arma utilizada y el móvil: al recurso más frecuente del arma de fuego en Cali le corresponde la importancia mayor de los ajustes de cuentas, mientras que en Bogotá el uso más frecuente de armas blancas coincide con la abundancia de las disputas. Estos resultados indican claramente la preeminencia de la delincuencia eco-

nómica sobre la violencia homicida en las dos ciudades (gran bandolerismo, pero también sectores delincuenciales y criminales menos organizados), de todas maneras con una mayor influencia mafiosa impuesta en Cali.

4. REPARTICIÓN DE LOS HOMICIDIOS EN LA CIUDAD

Los datos utilizados en el caso de Cali permiten comparar los lugares donde ocurren los homicidios (de hecho, se trata del sitio donde se encontró el cadáver) con los lugares de residencia de las víctimas. En los casos de los lugares de residencia, se observa una clara concordancia entre el nivel socioeconómico y la intensidad de la violencia, pues las zonas más afectadas son las más pobres (mapa 5.3a). En cambio, los lugares de ocurrencia están repartidos entre los barrios populares y el eje central donde se concentran el comercio y los servicios, con un peso mayor del primero (mapa 5.3b). Y gracias a los mapas elaborados por la Alcaldía entre 1992 y 1998 se sabe que esta distribución se conserva estable en el tiempo. Por otra parte, sin tener en cuenta más que los hechos gracias a los cuales los dos sitios son conocidos, existe entre el lugar de ocurrencia y el de residencia una coincidencia espacial elevada. La ciudad esconde lugares peligrosos cuyas víctimas principales son sus mismos habitantes. Este es el caso más representativo. Sin embargo, no es el único, y los mapas 5.3a y 5.3b ponen en evidencia un proceso de “densidad inestable”, es decir, de variación en la intensidad del poblamiento a lo largo de las horas del día (MILLE, 2000). En efecto, las zonas de empleo hacia las cuales fluyen cotidianamente los trabajadores (mapa 5.3c), que son las que concentran igualmente a los “lugares conflictivos” (según la expresión de Paz Pública: bares, discotecas, etc.), corresponden a los barrios cuyo número de homicidios constatados es muy superior al de residentes muertos. Se descubre así una violencia que acompaña a las movilidades funcionales de los ciudadanos (cotidianas o semanales), a su vez estructuradas por las zonas de actividad (empleo, comercio, diversión).

MAPA 5.3
 HOMICIDIOS EN CALI POR BARRIO EN 1996,
 SEGÚN SU LUGAR DE OCURRENCIA Y EL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA VÍCTIMA

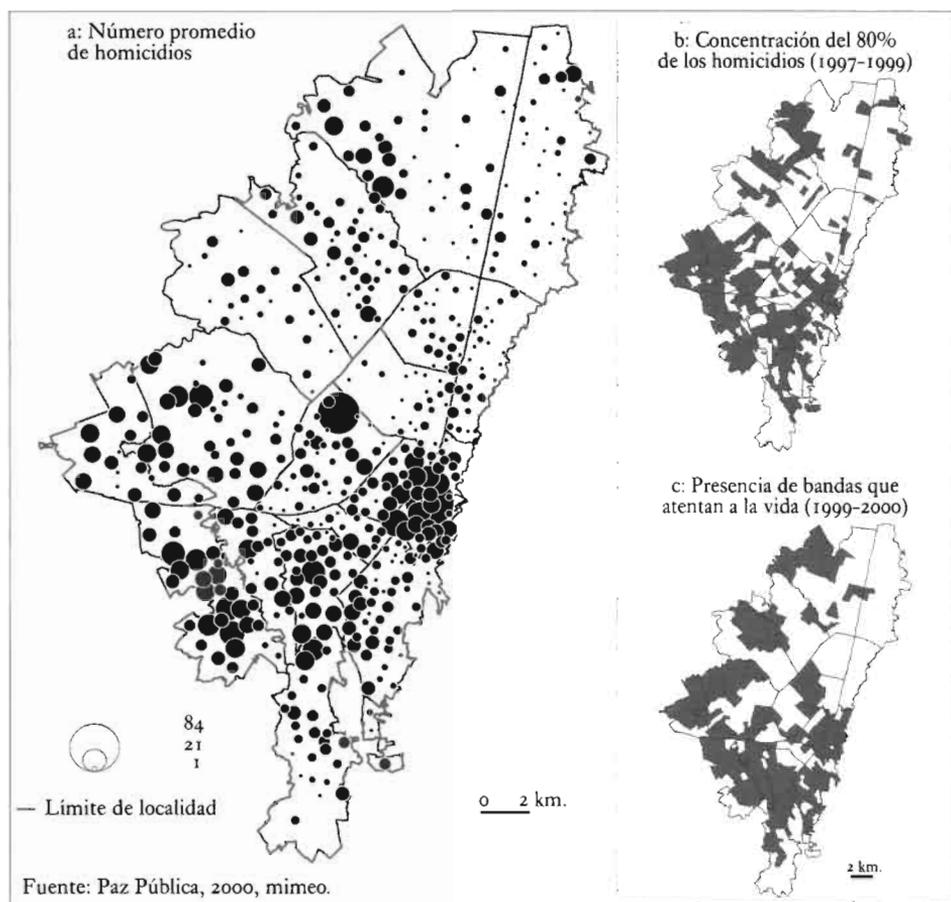


Concepción y realización: O. PISSOAT

Los datos utilizados en el caso de Bogotá no informan sobre el lugar de residencia de las víctimas. Pero estos datos pueden descomponerse según la hora de ocurrencia del crimen y también confirman las tendencias identificadas en Cali (mapa 5.4a). La repartición espacial de los homicidios revela su concentración en las zonas desfavorecidas y se conserva estable en el tiempo. En cuanto a la distribución temporal, sólo pudo ser analizada por barrios, lo que impide sacar conclusiones precisas; sin embargo, confirma la tesis del papel jugado por las movilidades domicilio-trabajo durante el día y las movilidades hacia los lugares para diversión cuando llega la noche.

Tanto en Bogotá como en Cali, los grupos más pobres de la población son así las víctimas preferenciales de la violencia homicida que frecuentemente afecta a los lugares de residencia, pero también sigue los desplazamientos intraurbanos. Así, la dinámica de la violencia en la ciudad está regida por otros fenómenos distintos al conflicto armado. Los investigadores de Paz Pública (mapas 5.4b y 5.4c) llegan a una conclusión similar. Según ellos, es la presencia de la delincuencia organizada, ligada a mercados ilícitos (drogas, armas, prostitución, etc.), lo que explica la distribución de los homicidios: “un diagnóstico público sobre el homicidio en un centro urbano como Bogotá no puede seguir ignorando la violencia engendrada por las estructuras criminales que operan allí” (LLORENTE et ál., 2000: 20). Sin embargo, mientras que en Cali el peso de las mafias explica la elevada tasa de homicidio, Bogotá parece sufrir una violencia mucho más corriente, que algunos denominan “síndrome de las grandes ciudades”.

MAPA 5.4
HOMICIDIOS EN BOGOTÁ POR SECTOR CENSAL (1997-1999)



Concepción y realización: O. PISOAT

D. LAS METRÓPOLIS COLOMBIANAS EN COMPARACIÓN CON OTRAS GRANDES CIUDADES DEL MUNDO

Los resultados de una comparación internacional, centrada en las metrópolis en 1994, coinciden con la jerarquía entre los Estados durante el mismo año (Naciones Unidas, 1994)²⁸. Con tasas generalmente más elevadas que las de sus

²⁸ Al reunir las estadísticas de las Naciones Unidas, del ISS y del FBI, la comparación evaluó a más de 70 ciudades. Estos datos, muy voluminosos, no se reproducen aquí.

respectivos países, en las capitales de América²⁹ se confirma la ocurrencia de la más alta violencia registrada. En Colombia, Cali y especialmente Medellín, manifiestamente se distinguen del resto del mundo. En cambio la cifra para Bogotá no es tan prominente. Es notablemente inferior a la de Washington y próxima a las de otras metrópolis de Estados Unidos. Las consideraciones coyunturales no pueden servir como explicaciones, pues las cifras del BID para 1999, más fragmentarias, muestran las mismas tendencias.

TABLA 5.3

TASAS DE HOMICIDIO POR 100.000 HABITANTES EN ALGUNAS METRÓPOLIS DEL MUNDO (1999)

Colombia	América central	América del Sur	América del Norte	Europa/Asia
Medellín 169	Guatemala 101	Caracas 76	Washington 73	Madrid 3
Cali 103	San Salvador 95	Río 63	New York 16	Paris 2
Bogotá 40	México 20	São Paulo 48	Ottawa 1	Londres 2
		Lima 25		Tokyo 1
		Buenos Aires 3		
		Santiago 2		

Fuente: H. ACERO, 2000.

ACERO³⁰, a la cabeza del servicio “Seguridad y Convivencia” de la Alcaldía de Bogotá, puede lamentar así la extendida confusión de la realidad bogotana con la situación de violencia sufrida en Medellín y Cali. De hecho, la capital de Colombia se mantiene en una tasa completamente similar a muchas otras grandes ciudades del continente. Es una tasa dos veces más baja que la de Caracas o Washington y permanece más abajo que las de Río de Janeiro y

29 Con las excepciones de Toronto, Buenos Aires y Santiago, comparables a las capitales europeas.

30 Entrevista, Bogotá, noviembre de 2000.

São Paulo donde actúan, como en Colombia, escuadrones de la muerte; todas estas aglomeraciones pertenecen a naciones que no sufren ninguna “guerra interna” (PÉCAUT, 2000: 6). La opinión de P. CASAS, director del Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá, encuentra aquí argumentos: “No existe ninguna relación entre la violencia política y la violencia urbana. La primera no tiene ningún impacto sobre la segunda. Son dos cosas completamente diferentes, y además, el problema de la inseguridad en Bogotá se parece bastante al que viven otras metrópolis americanas. De hecho, es un fenómeno común a todas las grandes ciudades desarrolladas del mundo entero”³¹. En el contexto colombiano esta afirmación puede parecer excesiva, pero eso no impide que –al contrario de muchos “violentólogos”– quienes trabajan específicamente sobre esta ciudad³² separen el conflicto nacional de las violencias de la capital del país. Ciertamente, Bogotá no está aislada del resto del país y de los combates que se desarrollan, pero ella padece sobre todo de un mal común a muchas otras metrópolis que no han podido controlar su criminalidad.

Una vez admitida su disociación del conflicto armado, las interpretaciones sobre la violencia centradas en las diferencias económicas y sociales pueden ser abordadas de nuevo. Puesto que condensa las divisiones de la sociedad, la ciudad refleja, en un solo lugar, el conjunto de las violencias que agobian al país (GUZMÁN et ál., 1993: 15). La violencia, hecho social total, se exagera en la ciudad porque ése es el lugar del poder, de la anomia, donde todo se compra, y donde las discriminaciones y las brutalidades hacia algunos grupos humanos son flagrantes. De acuerdo con J. PINHEIRO (1993: 3), no creemos que la ciudad misma sea la causa, sino la concentración del conjunto de esos factores en las sociedades urbanas particularmente fragmentadas donde se identifica al pobre como el criminal. Sin duda alguna, el mecanismo de repercusión de las crisis económicas y de las recomposiciones sociales urbanas sobre la violencia y su manifestación extrema, el homicidio, es complejo; su análisis pasa por

31 Entrevista, Bogotá, noviembre de 2000.

32 En todo caso, las que hemos entrevistado, quienes trabajan en las administraciones municipales o gubernamentales, en instituciones privadas, en ONG o en centros universitarios de investigación.

el estudio –tanto antropológico como estadístico– del conjunto del grupo sociales implicados en los diferentes tipos de delincuencia, de sus lógicas de paso al acto y de sus interacciones. Ese es uno de los desafíos mayores de la criminología moderna que supera ampliamente el marco de este capítulo. Más modestamente, nos concentraremos ahora en el análisis de la dinámica reciente de la delincuencia menor en Cali.

III. DETERMINANTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA DELINCUENCIA COMÚN EN CALI

En su acepción más general, en particular en Colombia, la expresión “delincuencia común” abarca el conjunto de crímenes y delitos del derecho común, cualquiera sea su gravedad, por oposición a los que engendran la violencia política y el conflicto armado. No obstante, muchos análisis recientes sobre la violencia en Colombia³³, como las dos primeras partes de este capítulo, insisten sobre la interpenetración de las prácticas de delincuencia “común” y “política”, en particular cuando se trata de los crímenes más graves (homicidio, atraco, secuestro, etc.), hasta tal punto que uno podría dudar de la pertinencia analítica de esta distinción. En esta sección, adoptaremos una definición más restringida de la “delincuencia común”, como sinónimo de delincuencia menor (principalmente los robos, con o sin violencia). A pesar de lo poco ortodoxa, esta elección nos parece indispensable en Colombia, donde la imposición del homicidio ejerce un efecto contaminante sobre el conjunto del campo de la criminología: al contrario, ella permite conservar una distinción descriptiva y explicativa entre formas fuertes y débiles de delincuencia.

Por otra parte, al menos en cuanto a su frecuencia real y la evolución de las cifras, son paradigmas de la interpretación sociológica los que forjan las percepciones y los diferentes análisis del fenómeno. Muy esquemáticamente –más adelante volveremos sobre esto– se oponen dos tesis: (1) La del dicho popular “quien se roba un huevo se roba un buey” (y sus variantes eruditas), plantea un encadenamiento causal entre las formas débiles y fuertes de violencia que

33 Cfr. por ejemplo CAMACHO y GUZMÁN (1990), DEAS y LLORENTE (1999), GAITÁN (1995) y FRANCO (1999).

conduce a la ideología de la “tolerancia cero” y a políticas totalmente represivas; (II) La que, al contrario, insiste sobre la independencia de la delincuencia menor respecto a la gran criminalidad, y también sobre los determinantes sociales y económicos de la primera, que justifica las políticas de prevención y de tratamiento social. Sin negar que existan casos de “adiestramiento” —especialmente en el medio carcelario— que pueden conducir desde pequeños delitos hasta crímenes más graves, nosotros defenderemos desde un punto de vista estadístico y sociológico la segunda tesis. Hay dos argumentos que nos parecen decisivos. El primero, que sólo aparecerá en filigrana en nuestras interpretaciones, al contrario está en el centro de muchas investigaciones en sociología, economía y antropología, conducidas actualmente en Cali (ver los trabajos de GUZMÁN y los de SALAZAR citados antes): se dirige a las motivaciones económicas y a las formas de capital y de organización implícitas en la delincuencia menor (armas, logística, división jerárquica del trabajo, etc.), radicalmente diferentes de las que caracterizan a los medios “profesionales” de la gran criminalidad y de la violencia institucional. De hecho, esta diferencia sólo raramente autoriza a los actores a pasar de un tipo de actividad a otro. El segundo argumento, que nos interesa directamente aquí, es la importancia de los efectos de la coyuntura socioeconómica global y los contextos sociales y espaciales locales sobre los niveles de la actividad delincuencial en la ciudad. Para desarrollar este argumento en dos tiempos, adoptaremos el punto de vista de la exposición de las poblaciones urbanas al robo. En primer lugar, situaremos el nivel y la evolución de las tasas de atentados a la propiedad en Cali, en el contexto nacional e internacional, para evaluar el efecto de la crisis social sobre la delincuencia común durante el período 1995-1998. Luego, analizaremos en detalle, a escala intraurbana, la exposición diferencial al robo según los contextos espaciales y sociales.

A. NIVELES Y EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA MENOR EN UNA COYUNTURA DE CRISIS SOCIAL

Como ya se dijo, la comparación internacional de los niveles de delincuencia común tropieza, mucho más aun que la del homicidio, con múltiples dificultades. La variabilidad en los indicadores, la incoherencia entre las encuestas

realizadas y las fuentes policiales, los diferentes métodos para calcular las tasas (en particular, según la definición de la población de referencia), la fragilidad de los métodos para la recolección de información respecto a los hogares (mala redacción de las preguntas, que entraña cuentas dobles, sondeos sesgados) y la inestabilidad de los tipos de delitos incluidos en las encuestas (robos con o sin violencia, agresión, incivildades, etc.) son otros factores de distorsión de las cifras que permiten la entrada a interpretaciones divergentes y a usos tendenciosos de las estadísticas.

Hasta donde sabemos, el más serio y reciente esfuerzo de síntesis sobre el tema en América Latina fue el que puso en marcha, en 1996, una red de siete centros de investigación coordinados por el BID³⁴, cuyos resultados fueron publicados entre 1999 y 2001. A pesar de los medios y de los criterios de exigencia implementados en este trabajo, los autores del primer informe reconocen que “la estimación de la violencia contra la propiedad ha conducido sin embargo a cifras menos creíbles y comparables (que para la violencia homicida)” (LONDOÑO y GUERRERO, 1999: 20). En efecto, son raras las cifras —citadas en este documento— que fueron establecidas mediante una metodología estable y rigurosa; entonces, no utilizaremos, a título de comparación, más que algunas estimaciones surgidas de las encuestas específicas de hogares conducidas bajo la tutela del BID en 1996 y 1999.

En primer lugar, situemos el nivel global de criminalidad no homicida que permite estimar la encuesta CIDSE-IRD realizada en 1998 en Cali (anexo 2) gracias a un indicador comúnmente utilizado: el número de delitos por cada 1.000 habitantes³⁵. En promedio, en el universo de la encuesta, representativo de alrededor del 80% de la población total de Cali, se produjeron entre mayo

34 Cfr. en particular LONDOÑO y GUERRERO (1999) y FAJNZYLBER, LEDERMAN y LOAYZA (eds.) (2001).

35 Lo obtenemos al sumar las declaraciones de acontecimientos que constituyen delitos jurídicos: por una parte los robos y por otra los golpes y heridas (sin armas, con arma blanca o con arma de fuego). Sin embargo, es muy necesario guardarse de establecer cualquier equivalencia entre los datos de la encuesta y las estadísticas de la policía, porque los hechos reportados por las encuestas no han sido objeto de calificación alguna por parte de la autoridad policial o judicial, mientras que las fuentes policiales o judiciales no reflejan en sí mismas más que los hechos reportados a la autoridad y calificados por ella.

de 1997 y mayo de 1998 cerca de 114 delitos por 1.000 habitantes. El 22% de los hogares reportó al menos un delito y los hogares afectados declararon en promedio 2,4 delitos en el año. Gracias al modelo “criminalidad” de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), realizada en las once principales ciudades del país en 1995, disponemos de un punto de referencia en el tiempo³⁶. Ese año, la tasa de criminalidad elaborada de la misma manera (robos, golpes y heridas, y hurtos voluntarios) y medida bajo el mismo método, se elevó a 44‰ en Cali, es decir, una tasa próxima al promedio observado en las 11 ciudades (48‰) y a la cifra de Bogotá (50‰)³⁷. En Cali, la proporción de hogares afectados no conoció la misma alza que el número de delitos: en 1995, alcanzó un 16,5% (la cifra de 1998 alcanza entonces un aumento de 33%). La duplicación del número de delitos reportados por los hogares en el curso del año (1,2 en promedio en 1995 *vs.* 2,4 en 1998) es responsable del aumento de las tasas de criminalidad³⁸.

La comparación a escala latinoamericana de las frecuencias del robo en la población adulta, medidas por las encuestas dirigidas por el BID durante el período 1995-1999 (tabla 5.4), hace caer, en lo que concierne a la criminalidad no homicida, el presupuesto frecuente entre los analistas sobre el carácter excepcional del caso colombiano. De hecho, cuando uno se esfuerza —como lo hicimos aquí en las seis ciudades del subcontinente— para no comparar más que los indicadores idénticos obtenidos con métodos homogéneos, el nivel de delincuencia común en Cali figura entre los más bajos: es semejante a los de las metrópolis brasileñas (o los de los países del cono sur), más bien reducido

36 Los resultados citados aquí fueron extraídos de M. RUBIO (1996 y 1999).

37 Mientras que el mínimo y el máximo son observados en las ciudades de menor importancia: 10‰ en Montería y 120‰ en Bucaramanga.

38 Como ya se dijo, la encuesta realizada en 1998 en Cali no representa más que cerca del 80% de la población de la ciudad, en razón de la exclusión de los barrios del norte. Esta falta de representatividad es tal vez la causa de cierta sobrevaloración de la criminalidad promedio (concentración de la observación en los barrios que tienen tasas elevadas). Sin embargo, incluso reteniendo la hipótesis de que las comunas no observadas conocen tasas inferiores a la mitad del promedio observado por la encuesta, la tasa promedio para el conjunto de la ciudad se elevaría al menos a 103‰, es decir, un aumento de 134% en relación a 1995.

en el contexto de los países andinos y sin común medida con los de los países de América central y de México³⁹. Así, si Colombia se sitúa por su tasa de homicidios entre los países más violentos del mundo, en cambio resulta erróneo extender esta calificación al campo de la delincuencia menor, como lo hacen algunos autores que consideran el fenómeno como evidente.

TABLA 5.4
ROBOS CON O SIN VIOLENCIA EN SEIS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA

Ciudades y orígenes	Cali 1995 (1)	Cali 1996 (2)	Cali 1998 (1)	Caracas 1996 (2)	México 1999 (4)	Rio de Janeiro 1996 (2)	San Salvador 1996 (2)	São Paulo 1999 (3)
Tasas de declaración individual * (%)	7,9	8,9	10	17	30	8,7	20	5.5

Fuentes: Según FAJNZYLIBER, LEDERMAN y LOAYZA (eds.), 2001, para las encuestas del BID y el BM; RUBIO, 1996 (según la ENH 1995) para las cifras de Cali en 1995; y Encuesta CIDSE-IRD de 1998 en Cali.

* Frecuencia individual de respuesta positiva para la pregunta sobre la ocurrencia de al menos un robo con o sin violencia durante el período de referencia entre la población adulta total. (1) año anterior, población de 18 años y más; (2) año anterior, población de 15 años y más; (3) año anterior, población total; (4) seis meses anteriores, población de 15 años y más.

Para volver con el tema en Cali, es innegable que en el intervalo de 1995-1998 la delincuencia común sufrió un aumento importante, que registra la encuesta CIDSE-IRD y confirman otras fuentes⁴⁰. El aumento no puede interpretarse sin algunas observaciones complementarias. En primer lugar, la disminución comprobada –durante el mismo período– de la violencia homicida⁴¹ es una primera prueba de la independencia, en relación a esta última, de una delincuencia menor, ligada principalmente a los atentados contra la propiedad para la rápida obtención de valores económicos muy limitados. Pero esencialmente, es necesario volver a situar este aumento en el contexto de la muy fuerte recesión que afecta al conjunto del país y particularmente a la región de Cali desde 1995; sus consecuencias económicas y sociales han sido analizadas en

39 Cfr. también LONDOÑO y GUERRERO (1999: 20).

40 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (1999: 57) y GUZMÁN, en URREA y ORTIZ (1999: 45 y 46).

41 Entre 1994 y 1999, las tasas en Cali pasaron de 130 a 100 hpcmh (-23%); en Medellín de 280 a 170 hpcmh (-39%); y en Bogotá de 70 a 40 hpcmh (-43%).

detalle en un informe de coyuntura para el Banco Mundial (URREA y ORTIZ, 1999), del cual citaremos algunos apartes.

Entre 1995 y 1998, el crecimiento económico en Cali –situado alrededor del 5% en promedio para el período de 1990–1994– experimentó una caída brutal debida al deterioro de la coyuntura nacional, que se extendió gravemente por los efectos directos e indirectos de la caída del cartel de la droga⁴². La recesión estuvo acompañada por una muy grave crisis social: caída casi general del poder adquisitivo y un crecimiento sin precedentes de las desigualdades socioeconómicas. Durante el período de 1994–1998, la población que vivía por debajo del umbral de pobreza pasó de 30% a 39%, y la que estaba bajo el umbral de indigencia pasó de 5% a 10% (ibíd., 1999: 20). El desempleo, situado en alrededor del 10% a comienzos de 1995, experimentó la cifra récord de 21% en junio de 1999 y afectó de manera muy injusta a la población según el sexo, la edad y el nivel de ingresos (ibíd., 1999: 27 a 43). Así, por ejemplo el desempleo entre los jóvenes es catastrófico (45% entre los 15 y 19 años, duplicó su tasa desde 1995) mientras se añade un subempleo considerable en la misma franja de edad (21%). Pero sobre todo es según el ingreso donde la desigualdad en el mercado de trabajo es patente y tiende a crecer: de una tasa de desempleo de 21% en 1994 entre la población del más bajo quintil de ingreso, se pasó a 38% en 1998, es decir 5 veces más que en el más alto quintil (8%). Si se tiene en cuenta el subempleo, evaluado en 20% para el primer quintil, entonces se observa que la quinta parte más pobre de la población de Cali es víctima de una exclusión masiva del mercado de trabajo. En efecto, se pueden imaginar –la muestra de la ENH no permite su estimación– las tasas de desempleo y de subempleo que golpean, localmente, a los jóvenes de los medios más pobres en los barrios marginales de la ciudad.

42 La evolución del PIB del departamento se invirtió por primera vez en 20 años, pasando de +3,5% en 1995 a -2,8% en 1998 (URREA y ORTIZ, 1999: 25, 52 y 53).

B. LOS FACTORES DE LA EXPOSICIÓN DIFERENCIAL AL ROBO EN CALI

En el contexto de la crisis social en Cali, ya sugerimos la existencia de un impacto muy real de la exclusión masiva del mercado de trabajo de la franja más pobre de la población en el ascenso de la delincuencia. Para abordar los determinantes espaciales y sociodemográficos de la exposición a la delincuencia, hemos decidido relacionar las declaraciones de robo sin atentados físicos⁴³ recogidas en la encuesta CIDSE-IRD con las características de los encuestados (recuadro 5.1). Examinamos en primer lugar la variación espacial del fenómeno (mapa 5.5). Las tasas por barrio muestran un nexo entre el contexto socioeconómico local y la frecuencia de los atentados contra la propiedad: en general, a medida que aumenta la inseguridad económica de los habitantes aumenta igualmente la inseguridad sobre los bienes. Así, las tasas más altas son las de los barrios populares del este⁴⁴. Sin embargo, hay una excepción en los barrios pobres del oeste, donde se observan las más bajas frecuencias en Cali. Entonces hay que notar que, incluso cuando se trata de un habitat autoconstruido tan precario –en promedio– como los barrios populares del este, la homogeneidad económica y social es mucho más fuerte⁴⁵. La hipótesis sugerida por el mapa 5.5 es entonces la de una injusticia social de exposición al robo irreductible al umbral del nivel medio de pobreza en el contexto residencial. Así mismo, es la heterogeneidad socioeconómica local la que produce el “mercado de la delincuencia” mientras, al contrario, la homogeneidad lo suprime, al mismo tiempo que una fuerte “cohesión” social aumenta el control de la desviación. A continuación, vamos a probar estadísticamente esta hipótesis a partir de datos individuales.

43 Hay dos razones para explicar esta elección: por una parte, los robos sin atentados físicos constituyen el 85% de los delitos comprendidos en la encuesta; por otra parte, su elevada frecuencia permite estimaciones fiables, a partir de la muestra, para los análisis selectos que seguirán, lo que no será el caso para los golpes y heridas.

44 Para tener una descripción precisa de la injusticia social y económica en Cali, por barrio, cfr. GUZMÁN y URREA, en ORTIZ (1999: 7 a 17).

45 G. VANEGAS (1998: 63 a 85) subraya la homogeneidad arquitectónica y social de esta parte de la ciudad, que se opone a la periferia oriental, mucho más contrastada.

RECUADRO 5.1
 MODELIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA EXPOSICIÓN AL ROBO EN CALI

Nos proponemos analizar la variabilidad de la frecuencia del robo en Cali (es decir, el porcentaje de individuos de 18 años y más, que hayan declarado al menos un robo en el año 1997-1998, que alcanza en promedio un 8%) en relación con tres tipos de variables:

1. Las características sociodemográficas: sexo, edad, situación matrimonial, nivel de educación, categoría socioprofesional y fenotipo del encuestado;
2. Algunos descriptores del contexto espacial y social al cual están expuestos los individuos: localización y estrato socioeconómico del lugar de residencia, lugar de trabajo (definido en el anexo 3), condición de migración;
3. Las respuestas a dos preguntas planteadas a los encuestados sobre su percepción de la infraestructura policial en el barrio (buena, regular, mala) y de la condición general del barrio (buena, regular, mala).

La regresión logística (procedimientos "Logistic" y "Catmod" de SAS) estima, con ayuda de un ajuste log-lineal de los datos, los efectos de las variables explicativas (parámetros de la ecuación) sobre la variable dependiente (presencia o ausencia de al menos un delito en el año): efectos principales de las variables consideradas independientes unas de otras y efectos cruzados de variables no independientes. El signo del parámetro indica el sentido del efecto: aumento (+) o disminución (-) de la probabilidad de ser robado (ofrecida por la respuesta marginal estimada). A cada parámetro está asociado un test estadístico (χ^2 de WALD) que mide la significatividad del efecto (indicado por los umbrales de confianza). Así por ejemplo, en el modelo final aceptado (tabla 5.5), por lo demás con todas las cosas iguales, los hombres tienen —de manera extremadamente significativa (umbral de confianza del 99,9%)—, una probabilidad de ser robados de alrededor de tres veces superior a la de las mujeres (13% versus 4%).

El proceso que permite desembocar en un modelo correctamente especificado es laborioso, debido al número de variables aceptadas desde el principio y al complejo juego de sus interacciones. Los modelos lógicos de predicción de respuestas individuales permiten, en un primer momento, poner orden al interior de los efectos directos, eliminando de inmediato las dos variables de percepción del barrio que se muestran muy redundantes junto a la localización y el estrato socioeconómico del lugar de residencia. Todos los otros efectos directos son muy significativos, excepto la situación matrimonial, eliminado del modelo final, y la edad, cuyo efecto depende del sexo. En cuanto a los efectos cruzados, los numerosos tests de especificación del modelo de frecuencias marginales dejan ver que el tamaño de la muestra no permite observar correctamente más que el del fenotipo del individuo con su categoría socioprofesional. Entonces llegamos a un modelo de ocho variables donde están especificados siete efectos: el sexo, el efecto cruzado del sexo y la edad, el nivel de educación, la caracterización del lugar de residencia, el lugar de trabajo, la condición de migración y el efecto cruzado del fenotipo y la categoría socioprofesional.

En este modelo, la hipótesis de la independencia de los residuos es rechazada, señal de no haber tenido en cuenta algunas interacciones, pero desafortunadamente el tamaño de las muestras no permite ir más lejos. Con todo, el modelo explica el 31,4% de la variabilidad total. Teniendo en cuenta el hecho de que el tamaño de la muestra nos ha forzado a utilizar nomenclaturas simplistas para la caracterización sociodemográfica de los individuos, y niveles de agregación geográfica toscos para la descripción de los contextos, esa cifra demuestra ampliamente la existencia de una conexión estadística fuerte entre esos factores y la exposición al riesgo de robo.

TABLA 5.5
EFECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INDIVIDUOS
SOBRE LA EXPOSICIÓN AL ROBO EN CALI (1997-1998)

Modalidades de las variables	Modalidad de referencia	Parámetro estimado ⁽¹⁾	Respuesta marginal estimada
Constante		-2,49	8%
Sexo	Hombre	0,58****	13%
	Mujer	-0,58	4%
Edad (hombres)	Hombres 25-29 años	-1,11***	3%
	Hombres 50-59 años	1,52****	28%
	Hombre 60 años o más	-0,18	6%
Edad (mujeres)	Mujeres 18-24 años	0,52*	12%
	Mujer 60 años o más	-0,50	5%
Nivel de educación	Secundaria incompleta	0,74****	15%
	Universitaria	-1,00	3%
Estrato socioeconómico y lugar de residencia	Muy bajo y bajo (1,2) barrios norte y este	0,71****	14%
	Muy bajo y bajo (1,2), barrios oeste	-0,86**	3%
	Alto y muy alto (5,6), barrios sur	-0,02	8%
Condición de migración	Nacido en Cali de padres nacidos en Cali, migrante del interior del Valle, Cauca o Nariño	-0,76****	4%
	Migrante del resto de Colombia	0,32	10%
Lugar de trabajo	A domicilio, local público (comercio, taller), vehículo (taxi, bus), puerta a puerta.	0,83****	16%
	Muestrario, quiosco, vendedores en calles	-0,94	3%
Prof. liberal, ejecutivo, secretaria, personal administrativo	Mulato	1,66***	30%
	Blanco	-1,16	3%
Vendedor fijo y ambulante, obrero calificado de la industria	Sin efecto de fenotipo		
	Blanco	-0,07	7%
Asalariado en servicios, obrero no calificado, desempleado	Negro	0,81**	16%
	Mestizo	-1,35**	2%
	Blanco	-0,01	8%
Obrero calificado del artesano, de la construcción, del transporte	Sin efecto de fenotipo		
	Blanco	0,84	16%
Empleado doméstico, mensajero, doméstica, jubilado, estudiante	Mestizo	-1,02***	3%
	Blanco	0,24	10%

(1) Efectos significativos en umbrales de confianza de: *90%, **95%, ***99%, ****99,9%.

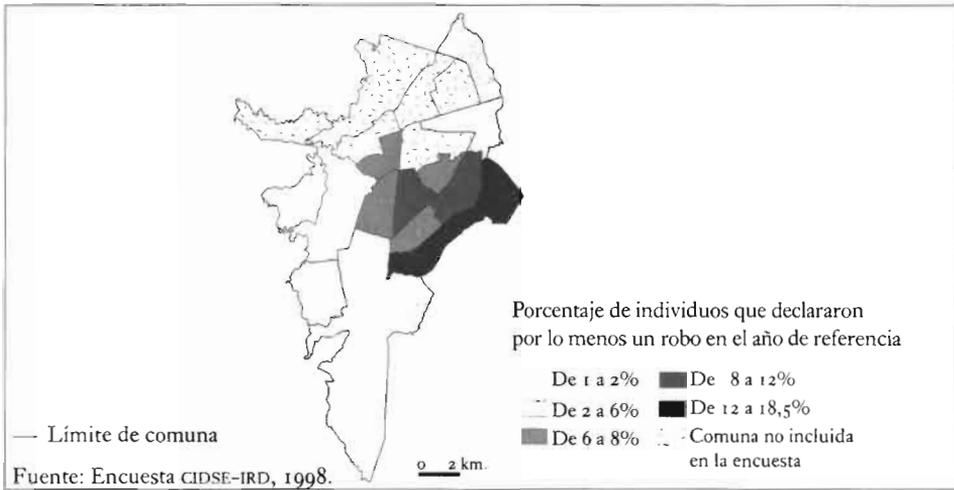
En esta tabla sólo se incluyen las modalidades de variables cuyo efecto es significativo.

Fuente: Encuesta CIDSE-IRD, junio 1998.

En primer lugar, se constata que la varianza explicada por el modelo se reparte de manera desigual entre dos tipos de factores: alrededor de un tercio es imputable a los efectos del sexo y la edad, mientras los dos tercios restantes son debidos a factores sociales y espaciales (de los cuales el 25% se debe sólo al efecto cruzado de la categoría socioprofesional y el fenotipo). En Cali, en 1998, entre las personas de 18 años y más, los hombres tienen una probabilidad tres veces superior a la de las mujeres de ser víctimas de un robo, por otra parte con todas las cosas iguales⁴⁶. La edad opera de manera muy diferente en los casos de la exposición al robo y en el de las formas graves de criminalidad que, sabemos, están fuertemente asociadas con los jóvenes adultos (tanto víctimas como actores). Según el modelo, los hombres de estos grupos de edad (sobre todo los que se encuentran entre los 25-29 años) al contrario están menos expuestos al robo que los de 60 años y más, mientras el riesgo más alto se sitúa entre los 50 a los 59 años; en total, los hombres de 50-59 años pueden ser robados diez veces más que los de 25-29 años. La lógica en el caso de las mujeres opera inversamente; la exposición al robo disminuye regularmente con la edad: las menores de 25 años se exponen así a un riesgo 2,5 veces superior al que corren las de más de 60 años.

46 Se trata de una constante en la criminología. En Colombia, entre los delitos registrados por la ENH en 1995, la proporción de hombres entre las víctimas era de 56%, mientras que la proporción en las 11 ciudades comprendidas en la encuesta es mayoritariamente femenina (RUBIO, 1996, tabla 11). Por otra parte, la tasa de masculinidad aumenta de acuerdo con la gravedad de los delitos; esta tasa alcanzaba el 67% en 1998 como promedio nacional para los golpes y heridas voluntarias (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 1999: 55 y 68) y puede volverse extrema en los casos de homicidios: 93,2% en 1996 en Cali (GUZMÁN, en URREA y ORTIZ, 1999: 51).

MAPA 5.5
ROBO SIN AGRESIÓN FÍSICA EN CALI POR COMUNA (1998)



Concepción y realización: O. BARBARY y O. PISSOAT

Ahora bien, conviene recordar algunas características de la población acusada de los crímenes o delitos. En su inmensa mayoría, se trata de una población joven y masculina. Según las estadísticas de la policía en 1995 en Cali, entre las personas implicadas en el conjunto de los delitos había un 96% de hombres, 58% de individuos entre los 18 a 30 años y un 12% de menores de 18 años, mientras la participación de mayores de 50 años fue marginal (2,6%). Entonces se puede sostener, siguiendo a GUZMÁN, que los crímenes graves se juegan “entre pares”; por tanto, víctimas y autores comparten las mismas características sociales: “hombres jóvenes, con bajo nivel de educación, trabajadores informales, obreros o empleados” (GUZMÁN, en URREA y ORTIZ, 1999: 51). Al contrario, en el caso de los pequeños delitos, la población delincuente (hombres jóvenes, incluyendo adolescentes) y la población de las víctimas principales (hombres de más de 40 años y mujeres de menos de 40 años) están disociadas. RUBIO deriva un argumento de esta misma constatación alcanzada en 1995 a partir de los datos de la ENH, para apoyar la tesis de un comportamiento “racional” de los delincuentes, quienes buscan reducir el riesgo atacando con mayor frecuencia a las personas mayores y a las mujeres (RUBIO, 1999: 250 y 252). En efecto, se sabe el papel que cumple el “cálculo” en

los comportamientos delictivos, pero en la lógica también prosaica del mercado, se puede llegar a pensar que los pequeños delincuentes no roban a sus pares, del mismo sexo y edad, en primer lugar porque éstos en general no tienen nada que robarles. El análisis de la exposición al robo según las características sociales y los contextos urbanos en Cali aclara esa discusión.

Los parámetros del modelo, analizados en su conjunto, permiten describir las categorías sociales más expuestas al riesgo de robo. Ellas se componen de activos surgidos de las clases populares con un nivel de educación intermedio (particularmente los trabajadores independientes y los obreros calificados del artesanado, la construcción, la industria y el transporte), quienes con mucha frecuencia residen en sectores muy bajos, bajos o medios de las zonas periféricas del este y el noreste de la ciudad (estratos socioeconómicos 1, 2 y 3). Así, con todo lo demás igual, las personas de nivel escolar secundario incompleto sufren una exposición al robo cinco veces superior a las que tienen un nivel universitario; los residentes de los tres más bajos estratos socioeconómicos de los barrios del este y el noreste, dos veces superior a quienes viven en los barrios medios y acomodados del sur de la ciudad, mientras que —como lo sugería la cartografía de las tasas— en los barrios auto-construidos de las franjas occidentales, esta exposición es cuatro veces menor que en los barrios populares del este. Respecto al efecto del contexto socioespacial, esos resultados, confirmados mediante los análisis antropológicos más finos (URREA, 2000), muestran que no es el nivel de precariedad socioeconómica lo que modula exclusivamente la actividad de la pequeña delincuencia, incluso si en la escala de los grandes rasgos de la geografía social de la aglomeración, la frecuencia de los delitos parece estar ligada a la tasa de pobreza. En la escala intermedia de los tipos de barrios de Cali, la situación que aparece como “criminógena” es la coincidencia de dos dinámicas: en primer lugar, la multiplicación de núcleos de extrema precariedad que genera la crisis económica y social, y en los cuales los hombres jóvenes en particular se encuentran prácticamente excluidos del mercado de trabajo⁴⁷; en segundo lugar, el incremento local

47 Es necesario asociar con esta exclusión el absentismo y la deserción escolar de los adolescentes, que alcanza niveles muy elevados entre los muchachos.

de la injusticia social. Esta yuxtaposición espacial a escala del barrio o, más frecuentemente, a escala de un conjunto de barrios contiguos incrementa la tensión entre la precariedad de los más pobres y el desahogo, muy relativo, de los menos pobres.

Trabajar a domicilio, en los espacios abiertos al público, en los transportes o bajo la modalidad puerta a puerta, multiplica los riesgos de robo por cinco en referencia a los lugares de trabajo más informales: muestrarios o escaparates, quioscos, ventas o servicios en la calle. Por otra parte, haber nacido en Cali de parientes nacidos en Cali, o ser migrante de origen relativamente cercano (interior del Valle, Cauca o Nariño), disminuye por dos la exposición al robo, en relación con los otros estatus migratorios. Estos efectos del lugar de trabajo y de la condición de migración testimonian, en forma indirecta, una dimensión importante de la exposición al riesgo ya evocada en la sección II. C: ésta varía en función de las prácticas espaciales y de la experiencia urbana de los actores delincuentes como de sus víctimas. En ausencia de datos sobre los lugares de la actividad delincencial, la movilidad entre la vivienda y el lugar de trabajo, los medios de transporte utilizados, los mapas mentales de las zonas de riesgo, etc. (para obtenerlos es menester emprender una encuesta específica), esos dos resultados no proveen más que una pista para la investigación. Las ocasiones para cometer un acto delictuoso –la localización y la identificación de una víctima potencial– están situadas precisamente en el espacio y el tiempo urbanos por una parte y, por otra, son resultado de la percepción *a priori* de la interacción social (elección de los lugares y las circunstancias en función del riesgo y del beneficio previstos, lectura de los comportamientos propicios o dudosos para los actores). ¿Se podrían, a partir de datos más precisos, actualizar las lógicas de esta exposición diferencial al robo según las prácticas espaciales, para ver cómo están socialmente determinadas o, al contrario, cómo dejan desarrollar a los actores estrategias preventivas? Estas preguntas permanecen abiertas para estudios específicos.

Ninguna fuente estadística disponible permite relacionar a las víctimas con los autores de los delitos que las han afectado, para estudiar directamente sus condiciones respectivas. Sin embargo, se pueden extraer de los resultados empíricos precedentes algunas conclusiones sobre la determinación contextual de la exposición a la delincuencia menor y su impacto social. La imagen

que se deriva es doble. Por una parte, la delincuencia menor en Cali se ejerce principalmente al seno de los barrios populares, bajo cierta proximidad espacial y social entre los autores y sus víctimas. Por otra parte, la exposición diferencial según el sexo, la edad, la categoría socioprofesional y la pertenencia racial establece muchas líneas de demarcación al seno de la población de esos barrios: entre hombres adultos o mujeres jóvenes más expuestos y entre hombres adolescentes o jóvenes menos expuestos, entre activos de las categorías socioprofesionales más expuestos y otras categorías o estatus de actividades menos expuestas (desempleados, jubilados, domésticas, estudiantes) y, en algunos casos, entre población negra y mulata más expuesta y población blanca y mestiza menos expuesta. Es probable que estas divisiones demográficas y sociales ahonden la cesura entre la población expuesta al riesgo de robo y la que lo comete. En opinión de URREA y ORTIZ (1999: 54 a 62), uno no puede menos que inquietarse respecto a las consecuencias sobre la cohesión social del mantenimiento de estas fracturas, que se traducen especialmente en una aguda presión de la delincuencia sobre los hogares menos pobres de los barrios populares. La recesión económica –más fuerte en Cali que en otras grandes ciudades colombianas– no sólo le hace perder a las colectividades locales (departamento y municipalidad) una gran parte de sus recursos financieros, sino que en este contexto los investigadores concluyen que:

Cali, comparada con las otras ciudades del país, ha realizado un esfuerzo mínimo de inversión social, particularmente en lo que concierne a la educación secundaria y tecnológica [...] por añadidura, la repartición del total de los gastos municipales se realiza en forma muy injusta, en detrimento de los barrios más pobres de las periferias orientales y occidentales (ibíd.: 63).

C. CONCLUSIÓN: CONFLICTO ARMADO Y “SÍNDROME DE GRANDES CIUDADES”

Las violencias que afectan a Colombia se han vuelto más complejas en el curso de los dos últimos decenios. Han entrado en resonancia unas con otras a medida que a las guerrillas se han sumado nuevos actores, cada vez más influyentes y activos (organizaciones de narcotraficantes, grupos paramilitares, escuadrones de la muerte, bandas de delincuentes en las ciudades, etc.). En el origen de

esta conmoción reside especialmente el progreso alcanzado por el comercio de estupefacientes, que le ha otorgado a la lucha entre los beligerantes sus características actuales (PÉCAUT, 2002: 30). El giro seguido por el conflicto, siempre más prosaico, por otra parte conduce a compararlo con muchas guerras civiles contemporáneas, en las cuales los protagonistas apuntan al control de las riquezas locales mediante estrategias que pretenden más bien acrecentar su propio poder que defender a las poblaciones que dicen representar.

La economía de la droga –responsable principal del establecimiento de redes mafiosas– al igual que de la criminalización y la ampliación del conflicto armado, alcanzó finalmente tal dimensión que llegó a hacer tambalear las mismas estructuras de la sociedad. Es así como ésta ha participado plenamente en el surgimiento del sentimiento de inseguridad experimentado por los ciudadanos, al favorecer la corrupción, la impunidad y, tal vez más aún, al alentar comportamientos extremos entre las bandas juveniles de las periferias urbanas. Pues en ese país, desde entonces urbano, son antes que todo –y como en otras partes– las exacciones enarboladas por la delincuencia común las que amenazan más directamente la vida cotidiana de los habitantes. Esos jóvenes delincuentes están, como en otras partes, motivados esencialmente por la voluntad de escapar a la marginación de la que son víctimas. Bien dispuestos a servir a uno u/ y otro bando por dinero, no están afiliados en lo absoluto a algún movimiento ideológico. El análisis tradicional del fenómeno, al permanecer centrado sobre los aspectos “institucionales” –insuficientes para describir las dinámicas en ocurrencia en el medio urbano–, no permite más que una lectura incompleta de la evolución de la violencia en ese mismo medio. Por lo demás, poner fin a los enfrentamientos “políticos” no resolvería más que parcialmente el problema general de la violencia en Colombia.

Sin embargo, no es cuestión de separar aquí de manera absoluta los combates librados en el campo de los crímenes perpetrados en las ciudades. Las interferencias entre los diversos tipos de violencia son indiscutibles y la distinción que establecemos es principalmente analítica. Del mismo modo, insistir sobre el papel de la delincuencia organizada no busca en modo alguno estigmatizar a los jóvenes de los barrios desfavorecidos, ni mucho menos. Sólo se trata de subrayar el peso del gran bandolerismo y de sus nebulosas, y mostrar cómo la violencia ligada al contexto guerrero repercute en las ciudades, recurriendo justamente a esa mano de obra capaz de todos los sacrificios.

La violencia en la ciudad está directamente ligada a ciertos disfuncionamientos de la sociedad. Es por eso que trabajar a nivel intraurbano arroja luces sobre los puntos abandonados por los expertos. Así ocurre con la pobreza, relegada a justo título para explicar el fenómeno en el plano nacional, pero que resulta imperativo tener en cuenta cuando se aborda el tema a nivel de las metrópolis. Nosotros lo hemos hecho a propósito de Bogotá y Cali, que a fin de cuentas son casos ejemplares (la una por ser la capital del país, la otra por haber sido la sede de uno de los carteles más poderosos de Colombia). Lo mismo vale para procesos como las densidades, las movilidades espaciales y luego las “densidades inestables”, o incluso las desigualdades socioespaciales que son temas poco estudiados en su asociación con la violencia. Si ellas no son propiamente urbanas, al menos son reconocibles, una vez más, en todas las aglomeraciones del planeta. Sobre todo, determinan una exposición diferencial a los riesgos y encierran elementos de interpretación que nos parecen útiles para la comprensión del funcionamiento de las ciudades, al igual que la de los mecanismos de la violencia.

BIBLIOGRAFÍA⁴⁸

- AGIER, M. “Colombie. La violence contre la politique”, en F. WEISSMAN (dir.). *A l'ombre des guerres justes. L'ordre cannibale et l'action humanitaire*, Paris, Flammarion/Médecins sans frontières, série Populations en Danger, 2003.
- ALVAZZI DEL FRATE, A. *Victims of crime in the developing world*, publicación 57, Roma, UNICRI, 1998.
- BODY-GENDROT, S. *Villes et violence. L'irruption de nouveaux acteurs*, Paris, PUF, Recherches politiques, 1993.
- BODY-GENDROT, S. y N. LE GUENNEC. *Mission sur les violences urbaines*, Paris, La Documentation Française, 1998.
- BODY-GENDROT, S. *Les villes la fin des violences?*, Paris, Presses de Sciences Po, 2001.

⁴⁸ No figuran aquí las referencias bibliográficas que tratan específicamente sobre Colombia: éstas se encuentran en la bibliografía general ubicada al final de la obra.

- BUI-TRONG, L. "Les violences urbaines à l'échelle des R. G. État des lieux en 1998", en *Les cahiers de la sécurité intérieure*, n.º 33, Paris, Ministère de l'Intérieur, 1999.
- CHESNAY, J. C. "L'homicide et le suicide dans le monde industriel: le cas russe", *Population*, n.º 1, Paris, 1999.
- DAVID, D. "Violence internationale: une scénographie nouvelle", *Ramses 2000*, Paris, IFEA-Dunod, 1999.
- Direction Centrale de la Police Judiciaire. *Aspects de la criminalité et de la délinquance constatées en France en 1998*, Paris, La Documentation Française, 1999.
- FAJNZYLBER, P.; D. LEDERMAN y N. Loayza (eds.). *Crimen y violencia en América Latina*, Bogotá, Alfaomega y Banco Mundial, 2001.
- GÓMEZ, H. (coord.). *Urban crime: global trends and policies*, Tokyo, United Nations University, 1989.
- LONDOÑO, J. L. y R. GUERRERO. *Violencia en América Latina, epidemiología y costos*, BID, Documento de trabajo de la Red de Centros de Investigación, R 375, 1999.
- MACÉ, A. "Les violences dites "urbaines" et la ville", *Annales de la Recherche Urbaine*, n.º 83-84, Paris, 1999.
- MILLE, M. "Les temporalités quotidiennes urbaines. L'exemple de la métropole lilloise", Lille, tesis de Doctorado en geografía humana de los espacios industriales, Université de Lille 1, 2000.
- MOSER, C. y E. SHRADER. *A Conceptual Framework for Violence Reduction*, Washington, World Bank, LCR, Sustainable Development Working Paper n.º 2, 1999.
- Naciones Unidas. *Demographic Yearbook*, New York, 1994 y 1999.
- PINHEIRO, P. S., "Reflections on urban violence", *The Urban Age*, vol. 1, n.º 4, Washington, 3, The London School of Economics and Political 1993.
- SCHÖNTEICH, M. "South Africa's position in Africa's crime rankings", *African security review*, vol. 9, n.º 4, Institute for Security Studies, Halfway House, 2000.
- SCHÖNTEICH, M. and A. LOUW. *Crime in South Africa: a country and cities profile*, Occasional Paper n.º 49, Centurion, shot Africa, Institute for Security Studies, Halfway House, 2001.
- WACQUANT, L. *Les prisons de la misère*, Paris, Raisons d'agir, 1999.